ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
PLN/2025/20	Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Extraordinaria
Fecha	23 de diciembre de 2025
Duración	Desde las 9:40 hasta las 11:15 horas
Lugar	Salón de Plenos
Presidida por	M. Desamparados Serrano LLoret
Secretaria Municipal	María Luisa Jiménez Hernández

ASISTENCIA A LA SESIÓN	
Nombre y Apellidos	**Asiste**
CONCEJALA PSOE- M. Desamparados Serrano LLoret	SÍ
CONCEJAL PSOE - Francisco J. Macia Serna	SÍ
CONCEJAL PSOE- José Gines Pelegrín Sánchez	SÍ
CONCEJALA PSOE- Ana Belén Berná Berná	SÍ
CONCEJAL PSOE Juan de Dios Navarro Maciá	SÍ
CONCEJAL IU-UP - Ángel García Aguilar	SÍ
CONCEJAL UCIN - Francisco Javier Pérez Trigueros	SÍ
CONCEJAL UCIN - José Antonio Illán Cutillas	SÍ
CONCEJALA UCIN - M Remedios Canales Zaragoza	SÍ
CONCEJALA PP - Inmaculada Cascales Salinas	SÍ
CONCEJALA PP - Rocio Cuadrado Illán	SÍ
CONCEJAL PP - José Rubén Grau Canales	SÍ
CONCEJAL PP -Antonio Vicente Ballester Manresa	SÍ
CONCEJALA PP - Estefanía Manresa López	SÍ
CONCEJAL PP - Juan Antonio Franco Amorós	SÍ
CONCEJALA PP - María Redondo Amorós	SÍ
CONCEJAL VOX - Rosario Pilar Griñán Ramón	NO
María Luisa Jiménez Hernández	SÍ
Mónica Cucarella Pérez	SÍ

MARIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ (1 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 30/04/2026
HASH: a1ddfde2b48d3c0e75d71ceb2da82357

Maria de los Desamparados Serrano Lloret (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 30/04/2026
HASH: eea71a16b2937521061ea74fdb39f7d0

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 66

ORDEN DEL DÍA

A) PARTE RESOLUTIVA

1. **Expediente 12179/2025 -** Propuesta Dictaminada relativa a la aprobación del Presupuesto 2026.

2. **Expediente 7695/2025 -** Propuesta Dictaminada relativa a la resolución de alegaciones presentadas frente al acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transferencia y tratamientos de residuos urbanos y la aprobación definitiva de la misma.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1. EXPEDIENTE 12179/2025

PROPUESTA DICTAMINADA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026.

La Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios, en sesión extraordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2025, dictaminó con 4 votos favorables (2 PSOE, 3 UCIN y 1 UI-UP), 1 voto en contra (PP) y 1 abstención (VOX), la siguiente propuesta:

En relación con el expediente nº 12179/2025 y en cumplimiento de la Providencia de la Concejalía de Hacienda de fecha 1 de octubre de 2025, emito el siguiente informe-propuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base en los siguientes,

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 66

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 7 de noviembre de 2025, se emitió informe jurídico de la Secretaría Municipal sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

SEGUNDO. Con fecha 15 de diciembre de 2025, se emitió informe de Intervención sobre la aprobación del presupuesto e informe sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

LEGISLACIÓN APLICABLE

PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— Los artículos 169, 170, 172 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 34 a 38 del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

— El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre

— El Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 66

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

— El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su redacción dada por el RD-ley 17/2014, esta Alcaldía, debe formar el Presupuesto General y remitirlo antes del 15 de octubre al Pleno de la Corporación, debidamente informado por la Intervención Municipal y con todos los anexos y documentación preceptiva, para su aprobación, enmienda o devolución.

Considerando que el expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos .

Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural de conformidad con lo previsto en los artículos 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, el Presupuesto municipal constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.

Resultando que en su virtud, el Presupuesto General de este Ayuntamiento está integrado exclusivamente por el Presupuesto del Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 66

Considerando que el proyecto de Presupuesto General contiene la documentación exigida por el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme a lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, incorporando los estados de gastos e ingresos y las Bases de Ejecución.

Considerando que el estado de ingresos del Presupuesto se ha confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que el estado de gastos se ha confeccionado conforme a lo previsto en el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que el Presupuesto no contiene déficit inicial, y que los ingresos por operaciones corrientes superan a los gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización por endeudamiento.

Visto el informe emitido sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Considerando que el procedimiento de aprobación del Presupuesto municipal debe ajustarse a lo regulado en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

Considerando que se ha incorporado al expediente como Anexo del Estado de previsión de movimientos y situación de la Deuda exigido por el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 66

Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en concordancia con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

Considerando que el acuerdo debe exponerse al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

Considerando que a efectos de presentación de reclamaciones tienen la consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, que podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el artículo 170.2. Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes.

Considerando que este Municipio tiene aplicado el modelo normal de contabilidad local, por cumplir los requisitos establecidos en la Regla 1.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013 por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Considerando que el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Considerando que la propuesta debe ser dictaminada previamente por la Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios, en virtud de lo previsto, en el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con los artículos 82, 123 y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

A la vista de los anteriores antecedentes, teniendo en cuenta la normativa de aplicación, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Es por lo que, quien suscribe propone incluir en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios, el estudio, debate y dictamen de la siguiente,

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 66

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2026, que contiene los estados de gastos e ingresos por un importe total de 16.121.108,74 euros, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	**8.103.584,02**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.184.661,86**
3	GASTOS FINANCIEROS	**155.344,11**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.823.028,29**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**70.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**930.491,12**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**5.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**848.999,34**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**16.121.108,74**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	**4.929.970,11**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	**97.485,96**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**3.231.395,16**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.907.064,82**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**47.600,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**5.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**902.592,69**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**16.121.108,74**

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, cuyo desglose figura como Anexo 14 en el expediente.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2026, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 66

reclamaciones que estimen convenientes, debiendo ser resueltas en el plazo de un mes por este Pleno.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que durante el plazo de exposición pública no se presente ninguna alegación o reclamación.

QUINTO. Aprobado definitivamente el Presupuesto, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, resumido por Capítulos, así como la plantilla de Personal para su vigencia e impugnación jurisdiccional.

SEXTO. Remitir copia del citado acuerdo a la Administración del Estado, así como a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma. Igualmente, en el plazo de treinta días se remitirá copia de la Plantilla aprobada a los órganos competentes en materia de Función Pública del Estado y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en el art. 127 TRRL.

La Alcaldesa-Presidenta abre el debate y se producen las siguientes intervenciones, las cuales pueden reproducirse mediante los archivos de audio que figuran en este documento.

Intervienen: Mª Desamparados Serrano LLoret, Francisco J. Maciá Serna, José Antonio Illán Cutillas, Ángel García Aguilar, Inmaculada Cascales Salinas, Juan de Dios Navarro Macià, Rocío Cuadrado Illán, Fco. Javier Pérez Trigueros, Secretaria y José Rubén Grau Canales

Audio: 01.mp3

Enlace: http://videople.es/8516

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María de los Desamparados Serrano LLoret, somete a votación la propuesta, que es aprobada por mayoría absoluta, con nueve votos a favor (5 PSOE, 3 UCIN y 1 IU-UP) y siete votos en contra (7 PP) de los dieciséis concejales presentes en el momento de la votación, de los diecisiete Concejales que de hecho y derecho componen la Corporación.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 66

2. EXPEDIENTE 7695/2025

PROPUESTA DICTAMINADA RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS FRENTE AL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS Y LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MISMA.

La Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios, en sesión extraordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2025, dictaminó con 4 votos favorables (2 PSOE, 3 UCIN y 1 UI-UP) y 2 votos en contra (1 PP y 1 VOX), la siguiente propuesta:

Visto que, en fecha 25 de septiembre de 2025, el pleno en sesión ordinaria adoptó el siguiente acuerdo:

> "PRIMERO. Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de Callosa de Segura en los términos del proyecto que se anexa en el expediente.
>
> SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios/sede electrónica y, además, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, para que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad [http://callosadesegura.sedelectronica.es].
>
> TERCERO. Finalizado el período de exposición, el Pleno resolverá las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el texto que proceda. En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo se elevará automáticamente

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 66

a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario (art. 17.3 TRLRHL), expidiéndose certificación por Secretaría.

CUARTO. Publicar el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobada en el BOP, entrando en vigor una vez efectuada dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL) y quedando sujeta exclusivamente a recurso contencioso-administrativo desde su publicación (art. 19 TRLRHL).

QUINTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para suscribir los documentos relacionados con este asunto y para la subsanación de errores materiales que pudieran apreciarse.

Visto que en fecha 6 de octubre de 2025 se publicó en el BOP edicto de información pública otorgando un plazo de alegaciones de 30 días hábiles.

Visto que durante el citado plazo de 30 días se han presentado alegaciones.

Visto el informe de la Tesorera municipal, de fecha 12 de diciembre de 2025, que se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES

Visto que, el Pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 25 de septiembre de 2025, acordó la aprobación provisional de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS, publicada en el BOP de Alicante número 190 de 6 de octubre de 2025.

Vistos los registros de entrada en los que se presentan alegaciones contra la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS, con el siguiente detalle:

Registro	***Fecha***	***Interesado***
2025-E-RE-8780	*17/11/2025*	*JOSE ANTONIO ZARAGOZA GALIANA*
2025-E-RC-8805	*17/11/2025*	*JOSE ANTONIO CAYUELAS GRAU*

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 66

2025-E-RC-8806	*17/11/2025*	*MARÍA TERESA SERRANO GARRI*
2025-E-RC-8816	*18/11/2025*	*JOSE MARÍA CASCALES SALINAS*
2025-E-RC-8820	*18/11/2025*	*ANTONIA ROLDÁN MACIÁ*
2025-E-RE-10442	*18/11/2025*	*ESTEFANIA MANRESA LÓPEZ*
2025-E-RE-10517	*18/11/2025*	*ESTEFANIA MANRESA LÓPEZ*
2025-E-RE-10440	*17/11/2025*	*ROCIO CUADRADO IILAN*
2025-E-RE-10439	*17/11/2025*	*MARÍA INMACULADA CASCALES SALINAS*
2025-E-RE-10436	*17/11/2025*	*REMEDIO AMORÓS MENARGUE*
2025-E-RE-10435	*17/11/2025*	*JUAN CARLOS FRANCO MARTÍNEZ*
2025-E-RE-10428	*17/11/2025*	*INMACULADA CASCALES MORA*
2025-E-RC-8822	*18/11/2025*	*CARMEN RUIZ ILLAN*
2025-E-RC-8823	*18/11/2025*	*FRANCISCO BAÑON LOPEZ*
2025-E-RC-8824	*18/11/2025*	*CRISTINA CASCALES ESPADAS*
2025-E-RC-8825	*18/11/2025*	*JOSEFINA FERRANDEZ RUIZ*
2025-E-RC-8826	*18/11/2025*	*OSCAR FERRANDEZ RUIZ*
2025-E-RC-8826	*18/11/2025*	*FRANCISCO BERNABEU MORA*
2025-E-RE-10451	*18/11/2025*	*MARIA REDONDO AMOROS*
2025-E-RC-8829	*18/11/2025*	*JOSEFA MANRESA LIDON*
2025-E-RC-8830	*18/11/2025*	*MARI CARMEN ILLAN FULLEDA*
2025-E-RC-8831	*18/11/2025*	*JOSE MARIA SALINAS MARTINEZ*
2025-E-RC-8833	*18/11/2025*	*PILAR AVILA MACIA*
2025-E-RC-8834	*18/11/2025*	*GREGORIO AVILA MACIA*
2025-E-RC-8835	*18/11/2025*	*CONCEPCIÓN MIGUELA RIQUELME OLIVER*
2025-E-RC-8836	*18/11/2025*	*ANA MARIA ROSIQUE CULIAÑEZ*
2025-E-RC-8837	*18/11/2025*	*JOSEFINA CULIAÑEZ MACIA*

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 66

2025-E-RC-8838	*18/11/2025*	*SALVADOR ESTAÑ CAMPELLO*
2025-E-RC-8846	*18/11/2025*	*SATURNINO MARTINEZ ARACIL*
2025-E-RC-8847	*18/11/2025*	*MIGUEL MARTÍNEZ ESCUDERO*
2025-E-RC-8848	*18/11/2025*	*JOSE LUIS LLINARES VAELLO*
2025-E-RC-8849	*18//11/2025*	*LUIS PASCUAL VALDES PASTOR*
2025-E-RC-8850	*18/11/2025*	*MARIA TERESA CULIAÑEZ RIVES*
2025-E-RC-8852	*18/11/2025*	*MARIA TERESA RIVES SEVA*
2025-E-RC-8853	*18/11/2025*	*JOSE MARIA CULIAÑEZ ALENDA*
2025-E-RC-8858	*18/11/2025*	*JOAQUIN FRANCIS MORENO LOPEZ*
2025-E-RC-8859	*18/11/2025*	*NATALIA SERRANO IÑIGO*
2025-E-RC-8860	*18/11/2025*	*ESPERANZA MARGARITA IÑIGO RAMÓN*
2025-E-RC-8861	*18/11/2025*	*MANUEL SERRANO ESTAÑ*
2025-E-RC-8862	*18/11/2025*	*ALEJANDRO MARTINEZ MARIN*
2025-E-RC-8863	*18/11/2025*	*ESPERANZA SERRANO IÑIGO*
2025-E-RC-8864	*18/11/2025*	*JESÚS BERNABEU CANALES*
2025-E-RC-8865	*18/11/2025*	*JESÚS BERNABEU CANALES*
2025-E-RC-8866	*18/11/2025*	*TRINIDAD MARTINEZ ESPINOSA*
2025-E-RE-10467	*18/11/2025*	*NATALIA SERRANO ESTAÑ*
2025-E-RE-10471	*18/11/2025*	*MANUEL MORA MANZANARO*
2025-E-RE-10516	*18/11/2025*	*MANUEL RAMON CAYUELAS*
2025-E-RE-10514	*18/11/2025*	*ANTONIO VICENTE BALLESTER MANRESA*
2025-E-RE-10513	*18/11/2025*	*MÓNICA ROCAMORA CANTO*
2025-E-RE-10507	*18/11/2025*	*FRANCISCO JAVIER ILLÁN CUTILLAS*
2025-E-RE-10506	*18/11/2025*	*JOSE RUBEN GRAU CANALES*
2025-E-RE-10505	*18/11/2025*	*PURIFICACION CONCEPCION CASCALES RODRIGUEZ*

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 66

2025-E-RE-10503	*18/11/2025*	*JOSÉ MANUEL GÓMEZ TORRES*
2025-E-RE-10493	*18/11/2025*	*JUAN ANTONIO FRANCO AMORÓS*
2025-E-RC-8902	*18/11/2025*	*DOLORES TOMAS MARCOS*
2025-E-RC-8900	*18/11/2025*	*JOSE MANUEL SORIANO ESPINOSA*
2025-E-RC-8899	*18/11/2025*	*ROBERTO SAMPER SERRANO*
2025-E-RC-8897	*18/11/2025*	*MARIA DOLORES RIQUELME MACIÁ*
2025-E-RC-8894	*18/11/2025*	*ANTONIO JUAN SAMPER SERRANO*
2025-E-RC-8893	*18/11/2025*	*ANTONIO JUAN SAMPER SERRANO*
2025-E-RC-8892	*18/11/2025*	*ROSA MARÍA PINA GARCIA*
2025-E-RE-10484	*18/11/2025*	*FRANCISCO JAVIER MANRESA ORTIZ*
2025-E-RC-8890	*18/11/2025*	*JOSÉ BERNABEU CANALES*
2025-E-RC-8889	*18/11/2025*	*CONCEPCIÓN CASCALES MORENO*
2025-E-RC-8888	*18/11/2025*	*CONCEPCIÓN CASCALES MORENO*
2025-E-RC-8886	*18/11/2025*	*ANTONIO CASCALES SALINAS*
2025-R-RE-10482	*18/11/2025*	*JOSE MARIA CASCALES GOMEZ*
2025-E-RC-8884	*18/11/2025*	*JOSÉ SAMPER HERNANDEZ*
2025-E-RC-8883	*18/11/2025*	*ANA MARIA SAMPER SERRANO*
2025-E-RC-8882	*18/11/2025*	*CARMEN SAMPER RUIZ*
2025-E-RC-8877	*18/11/2025*	*CARMEN PEREZ RABASCO*
2025-E-RC-8876	*18/11/2025*	*DESAMPARADOS PEREZ BAEZA*
2025-E-RE-10478	*18/11/2025*	*VICENTE MORA CULIAÑEZ*
2025-E-RE-10475	*18/11/2025*	*ANA MARIA MANZANARO REGUERA*
2025-E-RE-10474	*18/11/2025*	*VICENTE MORA MANZANARO*
2025-E-RC-8915	*18/11/2025*	*INMACULADA CONCEPCIÓN CAMPELLO GUILLEN*
2025-E-RC-8916	*18/11/2025*	*ANTONIA GUILLEN BELDA*

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 66

2025-E-RC-8917	*18/11/2025*	*MANUEL CAMPELLO CARTAGENA*
2025-E-RC-8919	*18/11/2025*	*JOSE ANTONIO SOLER LOPEZ*

Se emite el siguiente informe:

LEGISLACIÓN APLICABLE

- *Constitución Española.*
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.*
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*
- *Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular*

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR DÑA. ROCIO CUADRADO ILLAN.

1.- No contiene ningún desglose del coste real del servicio lo que impide comprobar que el importe total (1.764.197,82 €) corresponde realmente al coste de recogida de RSU.

2.- No incluye memoria justificativa del método de reparto del coste entre los contribuyentes lo que impide acreditar que las cuotas a aplicar guardan relación objetiva con el coste que cada usuario ocasiona.

3.- No se detalla cómo se amortizan las inversiones ni si forman parte del coste, omisión grave porque forma parte esencial del cálculo económico de toda tasa.

4.- Mezcla costes relacionados con la limpieza viaria sin acreditar su vinculación con el servicio de recogida RSU.

5.- La minoración por ingresos de ECOEMBES es incompleta y no se detalla su cálculo.

6.- No se incluye análisis de evolución histórica del coste.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 66

7.- No explica el volumen real de residuos generados lo que impide comprobar la proporcionalidad entre el coste del servicio y la generación real de residuos en el municipio.

8.- Ausencia de justificación de contratos externos (consorcio y convenios) por lo que no resulta acreditado que dichos importes corresponden exclusivamente al servicio de recogida, tratamiento y transferencia de Callosa.

9.- Falta de identificación de los medios personales adscritos al servicio.

10.- No se describe el servicio realmente prestado ni su organización.

***I.-** En relación a la primera de las críticas al informe técnico económico relativa a que no contiene un desglose del coste real del servicio, tal afirmación no es cierta.*

Consta en el informe de la Tesorera Accidental de 17.09.2025 que ha tenido en consideración el coste real de los servicios que se obtiene de los gastos previsibles del servicio, efectuando una distinción entre costes directos y costes indirectos.

Se indica expresamente en el informe que "Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o reparto alguno entre otras actividades o servicios."

Se añade en ese mismo informe que para la obtención de dichos datos se ha tenido en cuenta el "informe emitido al efecto por el Ingeniero municipal del Área Técnica del Ayuntamiento, D. Juan Navarro Muñoz", indicándose a continuación la totalidad de esos costes directos del servicio, con lo que no puede admitirse la afirmación de que no existe un desglose.

En cuanto a los costes indirectos vienen definidos en el informe como "aquellos que no se pueden identificar plenamente con el servicio y han de ser asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios. Se corresponden con la imputación de los gastos corrientes de los servicios generales de administración general y financiera. Se trata de los grupos de programa 920-Administración General (aplicado parcialmente), 931-Política Económica y Fiscal y 934-Gestión de tesorería, cuyas previsiones iniciales en 2025, ascienden a 801.104,01 euros."

Existe por tanto una definición de cuáles son los costes indirectos a aplicar, así como una explicación del método seguido para hallar el coeficiente de imputación de estos costes al servicio relativo a los RSU

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 66

En definitiva, los costes directos del servicio se hallan suficientemente detallados y de los indirectos está debidamente justificado cuales ha de entenderse como tales y su coeficiente de imputación, debiendo desestimarse tal alegación.

***II.-** Respecto de la falta de memoria justificativa del método de reparto del coste entre los contribuyentes, tampoco tal afirmación es cierta.*

En el informe de intervención nº 39/2025, de 17.09.2025 se explica cómo se ha procedido a la zonificación del término municipal en función de los valores catastrales de los inmuebles definiéndose dos ámbitos territoriales homogéneos, el diseminado y el casco urbano, con referencia al nº de parcelas, empadronados, valor metro y valor catastral de cada una de esas dos zonas de vivienda.

A partir de esos datos y del valor del metro y a efectos de adoptar la cuota teniendo en cuenta la capacidad económica y la mayor generación de residuos se determina la cuota estableciendo una ponderación por vivienda y otra por generación, siendo la primera determinante del 80% de la cuota y la segunda la determinante del restante 20%.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de enero de 2013, recurso de casación 940/2010, en relación con el principio de capacidad económica, del artículo 31.1 de la CE, y del de equivalencia referido a las tasas, ha declarado que "De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada", añadiendo que "A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando" , y concluye que "la superficie de los inmuebles y su valor es, en este caso, más que un criterio que fija la "capacidad económica" del sujeto pasivo un mero mecanismo, ciertamente sofisticado, de determinar el importe del servicio recibido en cada caso".

En cuanto a los inmuebles en los que se lleva a cabo una actividad económica se dice expresamente que se recomienda un incremento lineal.

Por tanto, está justificado el reparto del coste debiendo también desestimarse en este extremo la alegación presentada.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 66

III.- *Respecto al resto de omisiones que se indican como la falta de indicación de amortización de inversiones, falta de explicación del volumen real de residuos generados lo que impide comprobar la proporcionalidad entre el coste del servicio y la generación real de residuos en el municipio, ausencia de justificación de contratos externos (consorcio y convenios), falta de identificación de los medios personales adscritos al servicio o de la organización del servicio prestado no son causas ni suficientes ni relevantes para considerar la insuficiencia de los informes técnicos-económicos que forman parte del expediente.*

Esta conclusión requiere partir de la normativa reguladora.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a las entidades locales establecer tasas por la prestación de servicios públicos (art. 20.1).

Por otro lado, el artículo 24.2 establece que "En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

En el apartado 3 de este mismo precepto se define en qué consistirá la cuota tributaria y en el apartado 4 se establece que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas "

Y el artículo 25 dispone que "los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente".

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 66

Por su parte, el art. 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , dispone que: "Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta."

Partiendo de esa normativa la doctrina jurisprudencial de modo reiterado, congruente y estable ha venido estableciendo que el principio de equivalencia rige en su establecimiento, de suerte que la cuantía global de estos derechos económicos no excediera del coste global de los servicios que iban a financiar. Que la equivalencia entre coste del servicio e importe estimado de las tasas por la prestación del mismo debe referirse a "su conjunto" y no cabe, por lo tanto, exigir esa equivalencia en cada liquidación, o la importancia secundaria del principio de capacidad económica presenta en las tasas (STS de 30 de noviembre de 2002), y la importancia de la idea de contraprestación como tradicionalmente unida al concepto de tasa. En suma; el principio prevalente cuando de establecimiento de tasas se trata, es el de equivalencia de costes, en su conjunto.

Igualmente, ese principio de equivalencia no debe aplicarse de manera rígida o rigurosa sino razonablemente fundado en el conjunto de lo previsible.

Y, en fin, la STS de 16 de septiembre de 2010 recuerda que el «Informe técnico-económico» o «Memoria económico-financiera» que reclama la Ley debe especificar con el suficiente detalle cómo se han determinado las tarifas correspondientes a las tasas cuestionadas, conteniendo una referencia a los costes del servicio al que va a dar cobertura la tasa y a los ingresos previsibles. Constituye «un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas arbitrarias».

Es decir, de los preceptos expuestos resulta con claridad que todo establecimiento de una tasa exige una memoria o informe económico que en esencia cumpla la finalidad de justificar la necesidad de la imposición de la tasa, y sirve de garantía para justificar que la tasa establecida no supera el coste efectivo del servicio o actividad.

Según resulta del informe técnico-económico, el coste real (o efectivo) del servicio se ha determinado por la suma de los costes directos e indirectos.

En los directos se incluyen aquellos que se generan al Ayuntamiento como los que han de satisfacerse al Consorcio por la prestación del servicio, eliminando en este supuesto

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 66

la no siempre fácil tarea de cálculo de costes de personal, financieros, amortización del inmovilizado etc...

En el Informe/Memoria Técnico e Informe de Tesorería se parte pues de unos costes directos derivados del coste de los salarios en la recogida RSU debidamente desglosados, el coste de recogida de los envases ligeros, papel cartón, enseres y línea blanca, el coste financiero del arrendamiento y el grueso del importe de la tasa que asciende a 1.140.324,05 € que derivan del impuesto de depósito en vertedero y los costes del Consorcio Plan Zonal XII-Área 6:

1623	*22500*	*IMPUESTO ESTATAL SOBRE DEPOSITO RSU EN VERTEDERO*	***156.269,71 €***
1623	*46700*	*APORTACION AL CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***14.263,95 €***
1623	*46701*	*CONVENIO CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***969.790,39 €***
			1.140.324,05

Conforme a ello, el informe técnico-económico se considera suficientemente detallado en cuanto a los costes directos por la recogida de RSU y también en cuanto a la previsión de los costes por los servicios de tratamiento y eliminación de RSU al haberse considerado teniendo en cuenta los impuestos y coste de retribución del servicio prestado por el Consorcio. Los costes indirectos también vienen debidamente detallados como se ha expuesto en la consideración jurídica primera.

Y también y según se ha indicado al contestar la primera de las alegaciones se han fijado unas tarifas y calculado unos ingresos siguiendo unos parámetros que específicamente se detallan en los informes, sin que la distribución que se realiza entre las distintas clases de inmuebles sea objeto de impugnación.

Por otra parte, en el informe se concluye que los costes totales del servicio tienen relación directa y son superiores a los ingresos que se prevé obtener por aplicación de la tasa.

Así, de lo expuesto se constata que el contenido de los informes técnicos económicos de fecha de 17.09.2025 cumplen los presupuestos legales al ofrecer una justificación de la necesidad de la aprobación de la ordenanza fiscal, así como por contener una previsión del coste real del servicio y justificando que los ingresos previsibles no superan ese coste, respetando el principio de equivalencia en el establecimiento de la tasa.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 66

SEGUNDO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR MARÍA INMACULADA CASCALES SALINAS.

1.- Vulneración normativa del Decreto 55/2019 Consell. Artículo 6. Principios básicos: Quien contamina, paga y de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

2.- Se grava viviendas y locales independientemente de su ocupación o uso efectivo aplicándose a viviendas vacías que no producen residuos.

3.- Vicios sustanciales en el procedimiento de aprobación provisional de la OF que determinan la nulidad del Acuerdo Plenario de 25.09.25 por incurrir en desviación de poder, simulación administrativa y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al reproducir una ordenanza aprobada en 2024 y actualmente sub iudice. Infracción del principio de legalidad. Se tramita como nueva ordenanza y no como modificación con la finalidad de eludir los efectos de la sentencia pendiente. Se trata de una desviación de poder. Podría ser un delito de obstrucción a la justicia

4.- Falta de la necesaria justificación técnico-económica y vulneración de los principios de transparencia, objetividad y legalidad. Invalidez de los informes técnicos-económicos que sirvieron de base para la aprobación de la tasa. Artículo 20 Ley

5.- La tasa aprobada no resulta justa (proporcional), ni eficiente (no consigue la reducción de residuos ni la mejora de su separación) ni sostenible (no se aplican incentivos que motiven a la población en la reducción de residuos respetando el medio ambiente).

***I.** En relación a la primera de las alegaciones, no se ha producido en la tramitación del expediente y aprobación provisional de la Ordenanza la vulneración de la normativa que se invoca de adverso.*

El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa RSU "permita implantar sistemas de pago por generación". Por su parte, el apartado V del Preámbulo de la ley hace referencia a que estas tasas "deberían tender hacia el pago por generación".

Cierto es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos, pero no se trata de algo exigible desde este momento.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 66

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación.

Esta conclusión ha quedado plasmada en el apartado 2 del documento "CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA TASA LOCAL DEL RSU", documento consensuado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y Dirección General de Tributos), del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la finalidad de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa o, su alternativa, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento con carácter obligatorio antes del 10 de abril de 2025 se dispone por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, documento conjunto que constituye una guía para la regulación, gestión y aplicación de la tasa o PPPNT de RSU.

Por lo expuesto, debe desestimarse la alegación.

***II.** En cuanto a la segunda de las alegaciones relativa a que no deberían gravarse las viviendas vacías, se trata de una alegación simplista y que entra en contradicción con el hecho imponible definido por la propia Ordenanza.*

El artículo 2 de la Ordenanza determina en su apartado 1 que constituye el hecho imponible "la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales procedentes de viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio".

Además, en el apartado 3 de este mismo artículo se dice que: "El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios u ocupantes de viviendas, fincas o establecimientos cuando se preste efectivamente por el municipio de acuerdo al programa de gestión de residuos establecido"

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 66

Es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que excusa la cita concreta de sentencias, que la tasa de RSU se devenga en la medida en que el servicio de recogida de basuras esté establecido y los locales, viviendas, etc, se hallen en la ruta que siguen los vehículos de recogida, siendo a estos efectos intrascendente que ocasionalmente una vivienda concreta se halla desocupada pues no por ello el servicio de recogida los elude.

Que unas viviendas estén desocupadas o no habitadas no reduce en absoluto el coste de prestación del servicio de modo que la ecuación coste del servicio=tasa justifica plenamente la exigencia de la tasa en las circunstancias indicadas por lo que los artículos 2 y 3 de la Ordenanza son conformes a derecho.

La tesis sustentada por la alegante de que no puede entenderse prestado el servicio sino a partir del momento en que es efectivamente utilizado infringe el artículo 26 TRLHL que fija el momento de devengo de la tasa en aquel en que se inicia la prestación del servicio y, consecuentemente, la posibilidad de que el sujeto pasivo lo utilice por cuanto es el coste de servicio que se presta el que tiene que satisfacer la Administración, con independencia de la mayor o menor intensidad del uso que se haga por el sujeto pasivo.

En efecto, si el importe estimado de la Tasa tiene que fijarse en función del costo previsible del servicio, a tenor lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley, parece evidente que teniendo aquél la condición de general y obligatorio, no podría establecerse un costo ni siquiera aproximado si en lugar de tomar en consideración el número de las viviendas afectadas por el servicio, hubiera de tomarse, a voluntad de cada contribuyente, el que resultase de la mayor o menor ocupación de las mismas.

Y ello por cuanto la tasa se devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que, si se producen basuras, estas sean recogidas.

En definitiva, la tasa de recogida de basura es de recepción obligatoria, y en el caso de viviendas deshabitadas procederá igualmente el alta de oficio aun cuando no estén habitadas, pero se consideren habitables a todos los efectos, entendiendo que eso se produce cuando la vivienda cuente con servicios tales como agua, luz, etc....

Por lo expuesto, debe desestimarse la alegación.

***III.-** La tercera de las alegaciones relativa a vicios sustanciales en el procedimiento de aprobación provisional de la OF, desviación de poder, infracción del principio de legalidad, obstrucción a la justicia y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al*

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 66

reproducir una ordenanza aprobada en 2024 y actualmente sub iudice tampoco puede ser estimada.

La primera de las causas por las que fue impugnada la Ordenanza de 2024 es por un defecto formal y es por la falta de publicación de la aprobación provisional de la ordenanza en un periódico de los de mayor difusión de la provincia.

Tal como establece el TRLHL en su artículo 17.2 la obligación de publicar la apertura de trámite de audiencia tras la aprobación provisional de una ordenanza fiscal incluye también "un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la Comunidad Autónoma uniprovincial", cuando se trate de "las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes".

Pudiera pues darse la circunstancia que, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana en el procedimiento ordinario existente contra la tasa aprobada en 2024 considerar que la misma es nula de pleno derecho por la falta de ese trámite de audiencia, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas.

Nuestro TS posee una doctrina consolidada sobre los efectos que acompañan a los defectos formales en la elaboración de las disposiciones de carácter general. El principio general es que a los defectos formales debe acompañar la nulidad de pleno derecho de la disposición, en tanto es la legalidad formal, la elaboración de la disposición general respetando los cauces formales legalmente dispuestos, la que dota de legitimidad y fuerza de obligar al mandato normativo. Adquiriendo, si cabe, una relevancia extrema a efectos de la validez de la disposición, los trámites que se dirigen a procurar y garantizar la participación ciudadana y la seguridad jurídica mediante su conocimiento público, sobre todo respecto de aquellas disposiciones que pueden afectar directamente al núcleo de intereses de los ciudadanos, tal y como sucede en el caso de la Ordenanza Fiscal de RSU al tratarse de una disposición que afecta directamente a los residentes en su condición de contribuyentes en el municipio de Callosa, por lo que el trámite de exposición constituye trámite esencial, a cuya omisión o cumplimiento defectuoso debe acompañar la nulidad de la disposición, por así exigirlo los arts. 9.2 y 105,a) de la CE ..

Vista pues la importancia esencial del trámite de información pública y la consecuencia anulatoria que acarrea su omisión o defectuoso cumplimiento, pues se trata de un vicio procedimental que lleva a la nulidad de pleno derecho, por aplicación del art. 47 de la Ley 39/2015, toda vez que no nos encontramos ante una impugnación de un acto

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 66

administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza, haciendo innecesario en este caso entrar a dilucidar el resto de motivos hechos valer por la parte recurrente.

Por tanto, de estimarse la nulidad por falta de publicación, llevaría a que el municipio de Callosa de Segura se quedara sin ordenanza fiscal reguladora RSU y sin haber dado cumplimiento de proveerse de una ordenanza para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por esa razón no podía tramitarse como una mera subsanación de error o modificación de la Ordenanza solo la cuestión de la liquidación del pago de la tasa, sino que debía procederse a una nueva aprobación del texto íntegro por si el procedimiento judicial finaliza con una sentencia de carácter formal por nulidad pro vicio esencial y sin entrar en el fondo del asunto o en el resto de las cuestiones planteadas.

De este modo, las acusaciones de vulneración de la legalidad, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o desviación de poder no tienen cabida ni pueden ser admitidas por cuanto hasta la fecha no se ha dictado resolución judicial alguna que invalide o anule la ordenanza de 2024 por considerar el articulado de la misma o los informes técnicos que le sirven de fundamento, contrarios a derecho. Las acusaciones de la alegante no pueden prosperar en tanto se fundamentan en una hipótesis de futuro que sería un supuesto pronunciamiento judicial favorable a los recurrentes respecto al texto de la ordenanza de 2024.

Por lo expuesto, debe desestimarse la alegación.

***IV.-** En cuanto a la alegación de falta de la necesaria justificación técnico-económica y vulneración de los principios de transparencia, objetividad y legalidad, invalidez de los informes técnicos-económicos que sirvieron de base para la aprobación de la tasa, tampoco puede ser estimada, tal y como se argumenta a continuación*

El artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales , establece que "En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación del recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 66

servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y aprobados por el órgano competente."

Por su parte, el artículo 25, dispone que: "Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se pondrá de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente".

La exigencia de Memoria económico-financiera o informe técnico-económico constituye un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas arbitrarias.

Ahora bien, tal y como se ha reconocido jurisprudencialmente (STS 19/12/2007, rec nº 3164/2002) resultan evidentes las dificultades que en algunos supuestos pueden plantearse, al elaborar los estudios económicos justificativos, especialmente en el caso de pequeños municipios.

Así, la Sentencia del TS de 3 de marzo de 2002 (recurso de casación 9284/2006) confirmó la legalidad de la Ordenanza reguladora de Tasa por servicio de recogida, eliminación o tratamiento de residuos urbanos, que había fijado aquella en función de los costes de "todos" los servicios integrados en la Ordenanza Fiscal antes citada y según suma calculada en función de lo que el Ayuntamiento había de satisfacer a la entidad concesionaria por la prestación de dichos servicios.

En el presente supuesto los costes directos incluyen aquellos que se general al Ayuntamiento como los que han de satisfacerse al Consorcio por la prestación del servicio, eliminando en este supuesto la no siempre fácil tarea de cálculo de costes de personal, financieros, amortización del inmovilizado etc...

En el Informe/Memoria Técnico e Informe de Tesorería se parte se parte pues de unos costes directos derivados del coste de los salarios en la recogida RSU debidamente desglosados, el coste de recogida de los envases ligeros, papel cartón, enseres y línea blanca, el coste financiero del arrendamiento y el grueso del importe de la tasa que

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 66

asciende a 940.663,97 € que derivan del impuesto de depósito en vertedero y los costes del Consorcio Plan Zonal XII-Área 6:

1623	*22500*	*IMPUESTO ESTATAL SOBRE DEPOSITO RSU EN*	***156.269,71 €***
1623	*46700*	*APORTACION AL CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***14.263,95 €***
1623	*46701*	*CONVENIO CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***969.790,39 €***
			1.140.324,05 €

Conforme a ello, el informe técnico-económico se considera suficientemente detallado en cuanto a los costes directos por la recogida de RSU que aparecen debidamente detallados y también en cuanto a la previsión de los costes por los servicios de tratamiento y eliminación de RSU al haberse considerado teniendo en cuenta los impuestos y coste de retribución del servicio prestado por el Consorcio.

Posteriormente, y de acuerdo con el informe de la Oficina Técnica igualmente, se han fijado unas tarifas y calculado unos ingresos, sin que la distribución que se realiza entre las distintas clases de inmuebles sea objeto de impugnación.

Por otra parte, en el informe se concluye que los costes totales del servicio tienen relación directa y son superiores a los ingresos que se prevé obtener por aplicación de la tasa.

En definitiva, difícilmente podrá asumirse la vulneración de la equidad, del principio de beneficio o del de capacidad de pago, moviéndose la Ordenanza aprobada inicialmente dentro de la legalidad y del estricto cumplimiento de los artículos 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley de Reforma de las Haciendas Locales.

Procede, en consecuencia, desestimar la alegación correlativa.

***V.-** Tampoco puede admitirse la consideración efectuada de que la tasa aprobada no es justa, eficiente ni sostenible.*

Son parámetros que pueden considerarse de carácter objetivo para el cálculo de la tasa: La tipología o uso catastral del inmueble, el número de residentes en el inmueble, el valor catastral, la superficie del inmueble o su ubicación, para el caso de los residuos domésticos, y el tipo de actividad, superficie o ubicación del inmueble, entre otros, para el caso de los residuos de actividades económicas.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 66

Estos parámetros no son exigibles como números clausus en su totalidad, sino que los Ayuntamientos pueden utilizar unos u otros.

La Ordenanza inicialmente aprobada adopta la categorización del uso del inmueble (actividad económica) así como criterios referidos a la ubicación del inmueble (vivienda), como criterios genéricos para determinación de la cuota en cuanto reveladores de la capacidad económica.

Estos criterios permiten cuantificar, siquiera sea de forma indirecta, el volumen de residuos, atendiendo a la categoría de actividades; sintonizan con el principio de que quien contamina paga y, en definitiva, si sirven, a efectos de la distribución de la carga tributaria, a los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad.

La remisión a las distintas actividades como criterio para la aplicación de las distintas tarifas no resulta incoherente y permite conocer al contribuyente las cuantías que se aplican según actividades. Además, resulta razonable fijar la tarifa en función de las actividades de los locales, ya que la producción de residuos es diferente precisamente según el modelo de actividad con el que nos encontremos. En definitiva, desde esta perspectiva, la metodología incluida en la tasa -por remisión a la clasificación de las distintas actividades - no resulta ajena al principio de quien contamina paga, sin que tampoco quepa afirmar que se infringen los principios de capacidad económica y de proporcionalidad por la circunstancia de que la tasa se determine en función de la actividad que se desarrolla en los locales. Precisamente la característica de cada actividad es un indicador de la capacidad económica y proporcionalidad.

También respeta dichos principios la diferenciación entre viviendas de núcleo urbano o diseminadas. No parece ilógico que una vivienda diseminada genera un mayor coste atendido el desplazamiento fuera del núcleo urbano para la recogida de residuos, teniendo además un mayor valor catastral, según se concluye en el informe técnico económico, sin que existan indicios que permitan refrendar una conclusión diferente. La ubicación de las viviendas en el municipio (dentro del núcleo o fuera de él) refleja también el respeto al principio de capacidad económica y proporcionalidad desde otra perspectiva que en este caso sería esa ubicación y el incremento de las dificultades en cuanto a acceso y mayor coste de recogida por mayor coste en gasoil, tiempo de recogida, etc…

En definitiva, aun cuando la delimitación por actividades o por ubicación, permite una evaluación indirecta del volumen de residuos, pero no su determinación previa y exacta

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 66

para cada actividad o contribuyente, dicha circunstancia no determina la invalidez de la Ordenanza por cuanto no constituye una exigencia desde la perspectiva del principio de equivalencia ni a tenor de la legislación vigente, tampoco desde la entrada en vigor la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues esa previa evaluación de los residuos generados, de modo que se lleve a cabo una "determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente" tampoco parece ser exigible de entrada y si bien puede intuirse un marco jurídico tendente a la necesidad de una motivación reforzada de la tasa en la memoria financiera, a la luz del principio de quien contamina paga y de las exigencias del artículo 11 de la ley estatal, así como a la necesidad de avanzar hacia modelos de alta eficiencia (puerta a puerta y "contenedores inteligentes"), definidos como prioritarios por la misma norma, que permitan la identificación de los generadores, tal exigibilidad no lo es desde ya.

En consecuencia, procede su desestimación.

TERCERO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR DÑA. ROCIO CUADRADO ILLAN, DÑA. MARÍA REDONDO AMORÓS, D. JUAN ANTONIO FRANCO AMORÓS, DÑA ESTEFANÍA MANRESA LÓPEZ Y D. ANTONIO VICENTE BALLESTER MANRESA

1.- Ausencia de justificación técnica y normativa: ni el informe de Tesorería ni el del SUMA explican las fórmulas de cálculo, coeficientes aplicados y fundamento normativo de los valores propuestos. No se acredita la relación entre el coste real del servicio y las tarifas aprobadas.

2.- Nulidad del informe del SUMA por no estar firmado por funcionario competente ni asumido por el Ayuntamiento y del informe del tesorero accidental carece de justificación económica

3.- Inexistencia de una memoria económico financiera completa, clara y motivada.

4.- Falta de proporcionalidad y transparencia. Incrementos lineales de cuotas y valores homogéneos a zonas con realidades socioeconómicas diferentes, contraviniendo los principios de equidad y capacidad económica

5.-Opacidad metodológica: no se explican las fórmulas que permitan verificar el método de cálculo.

***I.-** En relación a la legitimación de la actora Dña. Rocío Cuadrado Illán, consta en el encabezamiento que actúa en su propio nombre y derecho sin hacer referencia a actuar en*

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 66

nombre de alguien. No obstante, en la alegación segunda hace referencia a Grupo Municipal que tampoco identifica.

Dado que la alegante ya tiene otro escrito de alegaciones en su propio nombre e interés lo damos plenamente por reproducido.

***II.-** No se hace referencia en la alegación presentada a los informes respecto de los que plantea los vicios, que no identifica en ningún momento por lo que se trata de una alegación relativa al procedimiento sub iudice en la que se limita a reproducir (al parecer) las conclusiones del informe pericial al que se remite y que no acompaña, sin fundamentar ninguna de esas conclusiones que alcanza.*

***III.-** Pese a la falta de rigor y contenido de la alegación respecto a la ordenanza que está siendo objeto de exposición pública, se va a proceder a contestar a la misma a efectos de evitar una futura alegación de falta de motivación.*

1.- Los informes emitidos y que obran en el expediente tramitado (no los que refiere la alegación) se hallan motivados técnica y jurídicamente. Cuestión distinta es que no se comparta esa motivación.

Tal y como ha manifestado en reiteradas sentencias el Tribunal Supremo, la motivación no exige un desarrollo exhaustivo y detallado de las razones que conducen a una conclusión, sino que en la resolución (en este caso informe) del que se predica la falta de motivación (justificación) existan elementos suficientes que permitan conocer la conclusión alcanzada.

En los informes acompañados la referencia a la normativa de aplicación, así como las consideraciones seguidas y metodología empleada para alcanzar las conclusiones de la equivalencia entre la tasa y las tarifas aplicadas se considera suficiente a efectos de esa justificación necesaria, siendo cuestión distinta si se comparten o no la metodología o criterios aplicados para fijar unas y otras tarifas.

La segunda de las conclusiones hace referencia al informe de SUMA y no a los dos informes técnicos económicos que forman parte del actual expediente como motivación del mismo.

La tercera y quinta, relativas a la falta de memoria económica financiera completa, clara y motivada, y la opacidad metodológica son consideraciones subjetivas que en este momento no resultan avaladas por no existir pronunciamiento judicial en el recurso

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 66

contencioso administrativo en el que han sido formuladas, considerando que han de desestimarse además por cuanto de los informes emitidos, según se ha expuesto, resulta motivación suficiente para tener por acreditado el requisito de equivalencia que es exigible y ha de resultar de los informes/memorias económicas.

Por último, la cuarta, relativa a la falta de proporcionalidad y transparencia remite al informe del SUMA, estando plenamente justificado y acreditado en los informes técnico económicos que avalan la ordenanza provisionalmente aprobada que se ha tenido en cuenta el principio de capacidad económica para fijar las tarifas de viviendas. En cuanto a locales, la aplicación de un incremento lineal no supone que no se haya tenido en cuenta ese mismo criterio de capacidad económica.

Procede también su desestimación por las razones que se exponen a continuación.

En el informe de intervención nº 39/2025, de 17.09.2025 se explica cómo se ha procedido a la zonificación del término municipal en función de los valores catastrales de los inmuebles definiéndose dos ámbitos territoriales homogéneos, el diseminado y el casco urbano, con referencia al nº de parcelas, empadronados, valor metro y valor catastral de cada una de esas dos zonas de vivienda.

A partir de esos datos y del valor del metro y a efectos de adoptar la cuota teniendo en cuenta la capacidad económica y la mayor generación de residuos se determina la cuota estableciendo una ponderación por vivienda y otra por generación, siendo la primera determinante del 80% de la cuota y la segunda la determinante del restante 20%.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de enero de 2013, recurso de casación 940/2010, en relación con el principio de capacidad económica, del artículo 31.1 de la CE, y del de equivalencia referido a las tasas, ha declarado que "De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada", añadiendo que "A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando" , y concluye que "la superficie de los inmuebles y su valor es, en este caso, más que un criterio

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 66

que fija la "capacidad económica" del sujeto pasivo un mero mecanismo, ciertamente sofisticado, de determinar el importe del servicio recibido en cada caso".

En cuanto a los inmuebles en los que se lleva a cabo una actividad económica se dice expresamente que se recomienda un incremento lineal.

Por tanto, está justificado el reparto del coste debiendo también desestimarse en este extremo la alegación presentada.

***IV.-** Respecto al resto de omisiones que se indican como la falta de indicación de amortización de inversiones, falta de explicación del volumen real de residuos generados lo que impide comprobar la proporcionalidad entre el coste del servicio y la generación real de residuos en el municipio, ausencia de justificación de contratos externos (consorcio y convenios), falta de identificación de los medios personales adscritos al servicio o de la organización del servicio prestado no son causas ni suficientes ni relevantes para considerar la insuficiencia de los informes técnicos-económicos que forman parte del expediente.*

Esta conclusión requiere partir de la normativa reguladora.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a las entidades locales establecer tasas por la prestación de servicios públicos (art. 20.1).

Por otro lado, el artículo 24.2 establece que "En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 66

En el apartado 3 de este mismo precepto se define en qué consistirá la cuota tributaria y en el apartado 4 se establece que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas "

Y el artículo 25 dispone que "los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente".

Por su parte, el art. 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , dispone que: "Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta."

Partiendo de esa normativa la doctrina jurisprudencial de modo reiterado, congruente y estable ha venido estableciendo que el principio de equivalencia rige en su establecimiento, de suerte que la cuantía global de estos derechos económicos no excediera del coste global de los servicios que iban a financiar. Que la equivalencia entre coste del servicio e importe estimado de las tasas por la prestación del mismo debe referirse a "su conjunto" y no cabe, por lo tanto, exigir esa equivalencia en cada liquidación, o la importancia secundaria del principio de capacidad económica presenta en las tasas (STS de 30 de noviembre de 2002), y la importancia de la idea de contraprestación como tradicionalmente unida al concepto de tasa. En suma; el principio prevalente cuando de establecimiento de tasas se trata, es el de equivalencia de costes, en su conjunto.

Igualmente, ese principio de equivalencia no debe aplicarse de manera rígida o rigurosa sino razonablemente fundado en el conjunto de lo previsible.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 66

Y, en fin, la STS de 16 de septiembre de 2010 recuerda que el «Informe técnico-económico» o «Memoria económico-financiera» que reclama la Ley debe especificar con el suficiente detalle cómo se han determinado las tarifas correspondientes a las tasas cuestionadas, conteniendo una referencia a los costes del servicio al que va a dar cobertura la tasa y a los ingresos previsibles. Constituye «un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas arbitrarias».

Es decir, de los preceptos expuestos resulta con claridad que todo establecimiento de una tasa exige una memoria o informe económico que en esencia cumpla la finalidad de justificar la necesidad de la imposición de la tasa, y sirve de garantía para justificar que la tasa establecida no supera el coste efectivo del servicio o actividad.

Según resulta del informe técnico-económico, el coste real (o efectivo) del servicio se ha determinado por la suma de los costes directos e indirectos.

En los directos se incluyen aquellos que se generan al Ayuntamiento como los que han de satisfacerse al Consorcio por la prestación del servicio, eliminando en este supuesto la no siempre fácil tarea de cálculo de costes de personal, financieros, amortización del inmovilizado etc.

En el Informe/Memoria Técnico e Informe de Tesorería se parte se parte pues de unos costes directos derivados del coste de los salarios en la recogida RSU debidamente desglosados, el coste de recogida de los envases ligeros, papel cartón, enseres y línea blanca, el coste financiero del arrendamiento y el grueso del importe de la tasa que asciende a 1.140.324,05 € que derivan del impuesto de depósito en vertedero y los costes del Consorcio Plan Zonal XII-Área 6:

1623	*22500*	*IMPUESTO ESTATAL SOBRE DEPOSITO RSU EN*	***156.269,71 €***
1623	*46700*	*APORTACION AL CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***14.263,95 €***
1623	*46701*	*CONVENIO CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6*	***969.790,39 €***
			1.140.324,05 €

Conforme a ello, el informe técnico-económico se considera suficientemente detallado en cuanto a los costes directos por la recogida de RSU y también en cuanto a la previsión de los costes por los servicios de tratamiento y eliminación de RSU al haberse considerado teniendo en cuenta los impuestos y coste de retribución del servicio prestado

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 66

por el Consorcio. Los costes indirectos también vienen debidamente detallados como se ha expuesto en la consideración jurídica primera.

Y también y según se ha indicado al contestar la primera de las alegaciones se han fijado unas tarifas y calculado unos ingresos siguiendo unos parámetros que específicamente se detallan en los informes, sin que la distribución que se realiza entre las distintas clases de inmuebles sea objeto de impugnación.

Por otra parte, en el informe se concluye que los costes totales del servicio tienen relación directa y son superiores a los ingresos que se prevé obtener por aplicación de la tasa.

Así, de lo expuesto se constata que el contenido de los informes técnicos económicos de fecha de 17.09.2025 cumplen los presupuestos legales al ofrecer una justificación de la necesidad de la aprobación de la ordenanza fiscal, así como por contener una previsión del coste real del servicio y justificando que los ingresos previsibles no superan ese coste, respetando el principio de equivalencia en el establecimiento de la tasa.

CUARTO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR DÑA. ROCIO CUADRADO ILLAN, D. JUAN ANTONIO FRANCO AMORÓS, DÑA ESTEFANÍA MANRESA LÓPEZ Y D. ANTONIO VICENTE BALLESTER MANRESA

1.- Nulidad de pleno derecho

2.- Simulación de nueva ordenanza y desviación de poder.

3.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

***I.-** En relación a la legitimación de la actora, consta en el encabezamiento que actúa en su propio nombre y derecho sin hacer referencia a actuar en nombre de alguien. No obstante, en la alegación segunda hace referencia a Grupo Municipal que tampoco identifica.*

Dado que este es el tercer escrito de alegaciones por parte de la misma persona, damos plenamente por reproducidos los motivos dados para desestimar las anteriores y respecto a la nulidad propugnada por los motivos invocados, indicar que también ha de ser desestimada por las razones que se pasan a exponer.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 66

II.- *La causa de nulidad fundada en vicios sustanciales en el procedimiento de aprobación provisional de la OF, desviación de poder, infracción del principio de legalidad, obstrucción a la justicia y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al reproducir una ordenanza aprobada en 2024 y actualmente sub iudice en la que se funda esta alegación tampoco puede ser estimada.*

La primera de las causas por las que fue impugnada la Ordenanza de 2024 es por un defecto formal y es por la falta de publicación de la aprobación provisional de la ordenanza en un periódico de los de mayor difusión de la provincia.

Tal como establece el TRLHL en su artículo 17.2 la obligación de publicar la apertura de trámite de audiencia tras la aprobación provisional de una ordenanza fiscal incluye también "un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la Comunidad Autónoma uniprovincial", cuando se trate de "las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes".

Pudiera pues darse la circunstancia que, sin entrar en el fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana en el procedimiento ordinario existente contra la tasa aprobada en 2024 considerar que la misma es nula de pleno derecho por la falta de ese trámite de audiencia, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas.

Nuestro TS posee una doctrina consolidada sobre los efectos que acompañan a los defectos formales en la elaboración de las disposiciones de carácter general. El principio general es que a los defectos formales debe acompañar la nulidad de pleno derecho de la disposición, en tanto es la legalidad formal, la elaboración de la disposición general respetando los cauces formales legalmente dispuestos, la que dota de legitimidad y fuerza de obligar al mandato normativo. Adquiriendo, si cabe, una relevancia extrema a efectos de la validez de la disposición, los trámites que se dirigen a procurar y garantizar la participación ciudadana y la seguridad jurídica mediante su conocimiento público, sobre todo respecto de aquellas disposiciones que pueden afectar directamente al núcleo de intereses de los ciudadanos, tal y como sucede en el caso de la Ordenanza Fiscal de RSU al tratarse de una disposición que afecta directamente a los residentes en su condición de contribuyentes en el municipio de Callosa, por lo que el trámite de exposición constituye trámite esencial, a cuya omisión o cumplimiento defectuoso debe acompañar la nulidad de la disposición, por así exigirlo los arts. 9.2 y 105,a) de la CE ..

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 66

Vista pues la importancia esencial del trámite de información pública y la consecuencia anulatoria que acarrea su omisión o defectuoso cumplimiento, pues se trata de un vicio procedimental que lleva a la nulidad de pleno derecho, por aplicación del art 47 de la Ley 39/2015, toda vez que no nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza, haciendo innecesario en este caso entrar a dilucidar el resto de motivos hechos valer por la parte recurrente.

Por tanto, de estimarse la nulidad por falta de publicación, llevaría a que el municipio de Callosa de Segura se quedara sin ordenanza fiscal reguladora RSU y sin haber dado cumplimiento de proveerse de una ordenanza para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por esa razón no podía tramitarse como una mera subsanación de error o modificación de la Ordenanza solo la cuestión de la liquidación del pago de la tasa, sino que debía procederse a una nueva aprobación del texto íntegro por si el procedimiento judicial finaliza con una sentencia de carácter formal por nulidad pro vicio esencial y sin entrar en el fondo del asunto o en el resto de las cuestiones planteadas.

De este modo, las acusaciones de vulneración de la legalidad, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o desviación de poder no tienen cabida ni pueden ser admitidas por cuanto hasta la fecha no se ha dictado resolución judicial alguna que invalide o anule la ordenanza de 2024 por considerar el articulado de la misma o los informes técnicos que le sirven de fundamento, contrarios a derecho. Las acusaciones de la alegante no pueden prosperar en tanto se fundamentan en una hipótesis de futuro que sería un supuesto pronunciamiento judicial favorable a los recurrentes respecto al texto de la ordenanza de 2024.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. JOSÉ CULIÁÑEZ ALENDA, D. LUIS PASCUAL VALDÉS PASTOR, D. JOSE L. LLINARES VAELLO, D. MIGUEL MARTÍNEZ ESCUDERO, D. SATURNINO MARTÍNEZ ARACIL, D SALVADOR ESTAÑ CAMPELLO, D. GREGORIA AVILA MACIÁ, DÑA. PILAR ÁVILA MACIÁ, D. JOSÉ MARÍA SALINAS MARTÍNEZ, D. FRANCISCO BERNABEU MORA, DÑA CRISTINA CANALES ESPADAS, D. FRANCISCO BAÑÓN LÓPEZ, DÑA CARMEN RUÍZ ILLÁN, DÑA ANTONIA ROLDÁN MACIÁ, DÑA REMEDIOS AMORÓS MENARGUES, D. JUAN CARLOS FRANCO MARTÍNEZ, DÑA INMACULADA CASCALES MORA, DÑA. MARÍA TERESA SERRANO GARRI, D. JOSÉ ANTONIO CAYUELAS GRAU, D. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZÁ GALIANA, DÑA. ANA MARÍA MANZANARO REGUERA, D. VICENTE MORA MANZANARO, DÑA TRINIDAD MARTÍNEZ ESPINOSA, D. MANUEL MORA

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 66

MANZANARO, D. JESÚS BERNABEÚ CANALES, DÑA. ESPERANZA SERRANO ÍÑIGO, D. ALEJANDRO MARTÍNEZ MARÍN, MANUEL SERRANO ESTAÑ, DÑA ESPERANZA MARGARITA ÍÑIGO RAMÓN, DÑA NATALIA SERRANO ÍÑIGO, D. JOAQUIN MORENO LÓPEZ, D. VICENTE MORA CULIAÑEZ, DÑA DESAMPARADOS PÉREZ BAEZA, DÑA. CARMEN PÉREZ RABASCO, DÑA CARMEN SAMPER RUÍZ, DÑA. ANA MARÍA SAMPER SERRANO, D. FRANCISCO JAVIER MANRESA ORTIZ, DÑA CONCEPCIÓN CASCALES MORENO, DOÑA ANTONIA CASCALES SALINAS, D. JOSÉ SAMPER HERNÁNDEZ, DOÑA Mª DOLORES RIQUELME MACIÁ, DÑA. MARÍA DOLORES TOMÁS MARCO, D. JOSE ANTONIO SOLER LÓPEZ, D. MANUEL CAMPELLO CARTAGENA, D. ANTONIO GUILLEM BELDA, DÑA. INMACULADA CONCEPCIÓN CAMPELLO GUILLÉN, DÑA MÓNICA ROCAMORA CANTÓ, D. FRANCISCO JAVIER ILLÁN CUTILLAS, DÑA PURIFICACIÓN CONCEPCIÓN CASCALES.

1.- Inexistencia de un programa de gestión de residuos.

2.- No se definen los beneficios fiscales causando indefensión a los particulares.

***I.-** En relación a la primera de las alegaciones, en ningún caso se exige por la legislación en vigor la existencia de un programa de gestión de residuos local con carácter previo a la aprobación de la Ordenanza del RSU.*

En efecto, lo que dispone el artículo 12.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular es que "corresponde a las entidades locales, a las ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales:

b) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

El precedente apartado a) de este mismo precepto establece que corresponde a las entidades locales "a) como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor".

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 66

De la literalidad de la norma (primer criterio interpretativo en la aplicación de la misma) se desprende:

1º.- Que los municipios de población superior a 5000 habitantes deben aprobar una ordenanza de RSU por ser un servicio obligatorio conforme a lo dispuesto en la ley "y en su caso" en los instrumentos de planificación que aprueben las CC.AA.

2º.- Que esos municipios (entre los que se encuentra Callosa) también han de aprobar programas de gestión de residuos "de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos". Por tanto, los planes municipales exigen la previa existencia de planes autonómicos y estatales.

Es decir, que la aprobación de la ordenanza es una exigencia inmediata conforme a la Ley 7/2022 pero no lo es la aprobación de programa que viene planteado como segundo objetivo y no como objetivo previo tal como pretende hacer valer el alegante.

Es el Estado y las Comunidades Autónomas, en este caso la Valenciana las que tienen que establecer las disposiciones de carácter general vinculantes y necesarias para la ordenación material y territorial de las actividades de gestión de residuos en nuestro territorio y posibilitar el cumplimiento de los objetivos que se prevean en esos planeamientos superiores y en la propia Ley 7/2022.

***II.-** Respecto a la falta de concreción de los beneficios fiscales limitándose el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal a señalar que "gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de ley"*

En este sentido, procede traer a colación el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relatico a los beneficios fiscales, régimen y compensación, que dispone que:

"1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 66

pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan ; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.

Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva."

Y conforme a lo anterior, el apartado 6 del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales únicamente establece la potestad de establecer una bonificación, conforme lo siguiente:

"Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local"

En cuanto a la referencia al pago por generación, el literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa RSU "permita implantar sistemas de pago por generación". Por su parte, el apartado V del Preámbulo de la ley hace referencia a que estas tasas "deberían tender hacia el pago por generación".

Cierto es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota,

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 66

otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos, pero no se trata de algo exigible desde este momento

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación.

Esta conclusión ha quedado plasmada en el apartado 2 del documento "CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA TASA LOCAL DEL RSU", documento consensuado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y Dirección General de Tributos), del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la finalidad de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa o, su alternativa, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento con carácter obligatorio antes del 10 de abril de 2025 se dispone por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, documento conjunto que constituye una guía para la regulación, gestión y aplicación de la tasa o PPPNT de RSU.

SEXTO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR DÑA. MARÍA TERESA RIVES SEVA, DÑA. MARÍA TERESA CULIAÑEZ RIVES, D. JOSÉ MARÍA CASCALES SALINAS, D OSCAR FERNÁNDEZ RUIZ, DÑA JOSEFINA FERNÁNDEZ RUIZ, DÑA. JOSEFINA CULIAÑEZ MACIÁ, DÑA. ANA Mª RESIQUE CULIAÑEZ, DÑA. CONCEPCIÓN RIQUELME OLIVER, DÑA. Mª CARMEN ILLÁN FULLEDA, D. JESÚS BERNABEU CANALES, DÑA. JOSEFA MANRESA LIDÓN, DÑA. NATALIA SERRANO ESTAÑ, D. ANTONIO JUAN SAMPER SERRANO, DÑA. ROSA Mª PINA GARCÍA, D. JOSÉ BERNABEU CANALES, D. JOSÉ MANUEL SORIANO ESPINOSA, D. ROBERTO SAMPER SERRANO, D. MANUEL RAMÓN CAYUELAS Y D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ TORRES.

1.- Vulneración del principio quien contamina paga y del TRLHL. Infracción del carácter finalista de la tasa y del principio de equivalencia. Vulneración del principio constitucional de reserva de ley.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 66

2.- Infracción del artículo 16 TRLHL. Falta de determinación en la ordenanza de los elementos esenciales de cuantificación del tributo.

***I.-** Se incluyen en la primera de las alegaciones varias infracciones relativas al principio quien contamina paga, al carácter finalista de la tasa, el principio de equivalencia y la reserva de ley.*

En cuanto a que la tasa se desvincula totalmente de la actuación concreta e individualizada y que se cobra el servicio se preste o no con independencia de su coste, tal afirmación no es cierta.

El artículo 2 de la Ordenanza determina en su apartado 1 que constituye el hecho imponible "la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales procedentes de viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio".

Además, en el apartado 3 de este mismo artículo se dice que: "El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios u ocupantes de viviendas, fincas o establecimientos cuando se preste efectivamente por el municipio de acuerdo al programa de gestión de residuos establecido"

Por su parte en el artículo 5 se dice que "Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del servicio municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales".

Es decir, se trata de una tasa que precisamente se devenga en tanto en cuanto se presta el servicio que es general y de recepción obligatoria.

Tampoco resulta cierto que la tasa se halla desvinculada del coste de servicio pues precisamente los informes técnico económicos obrantes en el expediente acreditan y prueban la correspondencia entre los costes del servicio y los ingresos derivados de la aplicación de las tarifas, así como el pleno respeto al principio de equivalencia, al no superar los ingresos los costos.

Respecto al carácter finalista de la tasa y principio de equivalencia, no se alcanza a comprender donde está la vulneración que se indica de que con la tasa se consiguen unos

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 66

fines distintos para los que legalmente está prevista su exacción, limitándose el alegante a reproducir una serie de sentencias del Tribunal Supremo que en ningún caso resultan de aplicación y a considerar que estamos ante una tasa puramente económica que nada tiene que ver con la prestación del servicio, afirmación vacua y no probada en modo alguno.

Por el contrario, consta en el informe de la Tesorera Accidental de 17.09.2025 tanto la justificación del coste del servicio como de los ingresos previsibles.

Así, se explicita que se ha tenido en consideración el coste real de los servicios que se obtiene de los gastos previsibles del servicio, efectuando una distinción entre costes directos y costes indirectos.

Se indica expresamente en el informe que "Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o reparto alguno entre otras actividades o servicios."

Se añade en ese mismo informe que para la obtención de dichos datos se ha tenido en cuenta el "informe emitido al efecto por el Ingeniero municipal del Área Técnica del Ayuntamiento, D. Juan Navarro Muñoz" , indicándose a continuación la totalidad de esos costes directos del servicio, con lo que no puede admitirse la afirmación de que no existe un desglose.

En cuanto a los costes indirectos vienen definidos en el informe como "aquellos que no se pueden identificar plenamente con el servicio y han de ser asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios. Se corresponden con la imputación de los gastos corrientes de los servicios generales de administración general y financiera. Se trata de los grupos de programa 920-Administración General (aplicado parcialmente), 931-Política Económica y Fiscal y 934-Gestión de tesorería, cuyas previsiones iniciales en 2025, ascienden a 801.104,01 euros."

Existe por tanto una definición de cuáles son los costes indirectos a aplicar, así como una explicación del método seguido para hallar el coeficiente de imputación de estos costes al servicio relativo a los RSU

Por otra parte, en el informe de intervención nº 39/2025, de 17.09.2025 se explica cómo se ha procedido a la zonificación del término municipal en función de los valores catastrales de los inmuebles definiéndose dos ámbitos territoriales homogéneos, el diseminado y el casco urbano, con referencia al nº de parcelas, empadronados, valor metro y valor catastral de cada una de esas dos zonas de vivienda.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 66

A partir de esos datos y del valor del metro y a efectos de adoptar la cuota teniendo en cuenta la capacidad económica y la mayor generación de residuos se determina la cuota estableciendo una ponderación por vivienda y otra por generación, siendo la primera determinante del 80% de la cuota y la segunda la determinante del restante 20%.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de enero de 2013, recurso de casación 940/2010, en relación con el principio de capacidad económica, del artículo 31.1 de la CE, y del de equivalencia referido a las tasas, ha declarado que "De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada", añadiendo que "A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando".

Por ello, estando debidamente justificados los costes directos e indirectos y los ingresos previsibles por aplicación de las tarifas y la equivalencia entre ambos, no puede concluirse que la tasa aprobada se aparta de la prestación del servicio y que se trata de una tasa económica de finalidad recaudatoria.

En cuanto a la afirmación de que en locales cerrados y sin uso se aplica una tarifa básica y no así en las viviendas, tampoco ha de estimarse como vulneración de norma alguna y causa de nulidad. Lo que se hace con esta aclaración es indicar que a todos los inmuebles se les aplica la tasa y dado que la tasa por uso distinto de vivienda (comercial, terciario o industrial) es superior a la de las viviendas precisamente por ese uso, si no se da el mismo, su tasa es la misma que la correspondiente a un inmueble de uso vivienda.

Y ello porque el pago o no de la tasa no viene dado por un uso u otro sino por la finalidad de la propia tasa en relación con la definición de su hecho imponible y devengo porque no se puede olvidar que la tasa se devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que, si se producen basuras, estas sean recogidas. De ahí que los locales cerrados pueden potencialmente usar el servicio solo que no será aplicable el "tipo agravado" del uso distinto a vivienda sino el de la vivienda.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 66

En definitiva, la tasa de recogida de basura es de recepción obligatoria, y en el caso de viviendas deshabitadas y locales desocupados procederá igualmente el alta de oficio aun cuando no estén habitadas, pero se consideren habitables a todos los efectos, entendiendo que eso se produce cuando la vivienda cuente con servicios tales como agua, luz, etc. Se hubiera quebrado el principio de igualdad si los locales cerrados hubieran sido exonerados del pago de la tasa, lo que no es el caso.

No resulta de aplicación para el argumento del compareciente el artículo 26.3 TRLHL invocado porque precisamente lo que viene a reafirmar es que el hecho es la prestación del servicio y si ese servicio no se presta (por el Ayuntamiento) es cuando se podrá proceder a la devolución del importe correspondiente. Es decir, lo que permite la devolución es la falta de prestación del servicio, pero en ningún caso el no uso del mismo.

Acreditado el respeto al principio de equivalencia y de igualdad queda por examinar la alegación relativa a la infracción del principio quien contamina paga o del pago por generación

El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa RSU "permita implantar sistemas de pago por generación". Por su parte, el apartado V del Preámbulo de la ley hace referencia a que estas tasas "deberían tender hacia el pago por generación".

Cierto es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos, pero no se trata de algo exigible desde este momento

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación.

Esta conclusión ha quedado plasmada en el apartado 2 del documento "CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA TASA LOCAL DEL RSU", documento consensuado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y Dirección General de Tributos), del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la finalidad

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 66

de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa o, su alternativa, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento con carácter obligatorio antes del 10 de abril de 2025 se dispone por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, documento conjunto que constituye una guía para la regulación, gestión y aplicación de la tasa o PPPNT de RSU.

Sentado lo anterior, son parámetros que pueden considerarse de carácter objetivo para el cálculo de la tasa: La tipología o uso catastral del inmueble, el número de residentes en el inmueble, el valor catastral, la superficie del inmueble o su ubicación, para el caso de los residuos domésticos, y el tipo de actividad, superficie o ubicación del inmueble, entre otros, para el caso de los residuos de actividades económicas.

Estos parámetros no son exigibles como números clausus en su totalidad, sino que los Ayuntamientos pueden utilizar unos u otros.

La Ordenanza inicialmente aprobada adopta la categorización del uso del inmueble (actividad económica) así como criterios referidos a la ubicación del inmueble (vivienda), como criterios genéricos para determinación de la cuota en cuanto reveladores de la capacidad económica.

Estos criterios permiten cuantificar, siquiera sea de forma indirecta, el volumen de residuos, atendiendo a la categoría de actividades; sintonizan con el principio de que quien contamina paga y, en definitiva, si sirven, a efectos de la distribución de la carga tributaria, a los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad.

La remisión a las distintas actividades como criterio para la aplicación de las distintas tarifas no resulta incoherente y permite conocer al contribuyente las cuantías que se aplican según actividades. Además, resulta razonable fijar la tarifa en función de las actividades de los locales, ya que la producción de residuos es diferente precisamente según el modelo de actividad con el que nos encontremos. En definitiva, desde esta perspectiva, la metodología incluida en la tasa -por remisión a la clasificación de las distintas actividades - no resulta ajena al principio de quien contamina paga, sin que tampoco quepa afirmar que se infringen los principios de capacidad económica y de proporcionalidad por la circunstancia de que la tasa se determine en función de la actividad que se desarrolla en los locales. Precisamente la característica de cada actividad es un indicador de la capacidad económica y proporcionalidad.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 66

También respeta dichos principios la diferenciación entre viviendas de núcleo urbano o zonas diseminadas. No parece ilógico que una vivienda diseminada genera un mayor coste atendido el desplazamiento fuera del núcleo urbano para la recogida de residuos, teniendo además un mayor valor catastral, según se concluye en el informe técnico económico, sin que existan indicios que permitan refrendar una conclusión diferente. La ubicación de las viviendas en el municipio (dentro del núcleo o fuera de él) refleja también el respeto al principio de capacidad económica y proporcionalidad desde otra perspectiva que en este caso sería esa ubicación y el incremento de las dificultades en cuanto a acceso y mayor coste de recogida por mayor coste en gasoil, tiempo de recogida, etc.

En definitiva, aun cuando la delimitación por actividades o por ubicación, permite una evaluación indirecta del volumen de residuos, pero no su determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente, dicha circunstancia no determina la invalidez de la Ordenanza por cuanto no constituye una exigencia desde la perspectiva del principio de equivalencia ni a tenor de la legislación vigente, tampoco desde la entrada en vigor la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues esa previa evaluación de los residuos generados, de modo que se lleve a cabo una "determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente" tampoco parece ser exigible de entrada y si bien puede intuirse un marco jurídico tendente a la necesidad de una motivación reforzada de la tasa en la memoria financiera, a la luz del principio de quien contamina paga y de las exigencias del artículo 11 de la ley estatal, así como a la necesidad de avanzar hacia modelos de alta eficiencia (puerta a puerta y "contenedores inteligentes"), definidos como prioritarios por la misma norma, que permitan la identificación de los generadores, tal exigibilidad no lo es desde ya.

***II.-** En cuanto a la nulidad de la ordenanza por infracción del artículo 16 TRLHL debe desestimarse sin más pues en ningún caso el precepto invocado exige para cuantificar la cuota tributaria conocer el número de empadronados en cada inmueble o el número de residuos generados por persona, año y barrio.*

Lo que se exige en la aprobación de la tasa es justificar cuales son los parámetros utilizados y criterios seguidos para determinar las distintas cuotas tributarias, o, como dice el precepto "los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias".

De los informes técnicos económicos resulta suficiente motivación de los criterios y parámetros adoptados para calcular las distintas cuotas, sin que sea exigible ese detalle personalizado en cuanto al residuo generado por persona, año o barrio, conforme a los argumentos ya expuestos en la consideración anterior y cuya reproducción se obvia para no caer en reiteraciones innecesarias.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 66

No existe en definitiva una norma que contenga una regulación taxativa de cuáles son los elementos necesarios para la determinación de las cuotas.

SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. JOSÉ MARÍA CASCALES GÓMEZ.

1ª. No se especifican cuáles son las exenciones, bonificaciones ni su aplicación.

2ª. Inexistencia de un programa de gestión de residuos

3ª. Infracción del principio de quien contamina, paga.

4ª. Uso desviado de la finalidad de la tasa siendo puramente recaudatoria sin relación alguna con la prestación del servicio.

5ª. Infracción del artículo 16 TRLHL. Falta de determinación en la ordenanza de los elementos esenciales de cuantificación del tributo.

***I.-** En cuanto a que no especifican ni las exenciones ni las bonificaciones.*

*La Ley 7/2022 prevé que las Tasas/PPPNT que establezcan las entidades locales **podrán tener en cuenta reducciones en la cuota** por distintas circunstancias, entre las que cita las siguientes:*

- *Práctica de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica separable.*
- *Participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, como los puntos limpios o puntos de entrega alternativos.*
- *Personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.*

*Asimismo, también resulta de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo 24.4 del TRLRHL, que dispone que "para la determinación de la cuantía de las tasas **podrán tenerse en cuenta** criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas", lo que habilita, por ejemplo, para el reconocimiento de beneficios fiscales en favor de familias numerosas o monoparentales.*

El establecimiento de reducciones en esta Tasa/ PPPNT debe ser para supuestos concretos, objetivos, motivados y limitados, para no poner en riesgo el principio de que la

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 66

tasa debe ser "no deficitaria". Cuanto mayor sea el importe global de los beneficios fiscales más se alejará la tasa del cumplimiento del objetivo de cobertura del coste del servicio. Asimismo, hay que tener en cuenta que el objetivo de esta tasa es fomentar la reducción de residuos, por lo que, si se concede a determinados colectivos una reducción o bonificación elevada, podría fomentarse conductas contrarias al cumplimiento de dicho objetivo, ya que, si no pagan la tasa o lo hacen en cuantía mínima, no procurarán disminuir la cantidad de residuos que generen.

Estas razones –el carácter potestativo en el reconocimiento de reducciones o bonificaciones y el riesgo a infringir el principio de que la tasa no ha de ser deficitaria- han llevado a que en la Ordenanza aprobada no se contemplen ni reducciones ni bonificaciones en la cuota salvo la disposición genérica prevista en el artículo 6 de que "gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de ley", lo que supone el respeto al principio de reserva de ley y garantiza la seguridad jurídica.

***II.-** En relación a la falta de un programa de gestión de residuos, en ningún caso se exige por la legislación en vigor la existencia de un programa de gestión de residuos local con carácter previo a la aprobación de la Ordenanza del RSU.*

En efecto, lo que dispone el artículo 12.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular es que "corresponde a las entidades locales, a las ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales:

b) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

El precedente apartado a) de este mismo precepto establece que corresponde a las entidades locales "a) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor".

De la literalidad de la norma (primer criterio interpretativo en la aplicación de la misma) se desprende:

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 66

1º.- Que los municipios de población superior a 5000 habitantes deben aprobar una ordenanza de RSU por ser un servicio obligatorio conforme a lo dispuesto en la ley "y en su caso" en los instrumentos de planificación que aprueben las CC.AA.

2º.- Que esos municipios (entre los que se encuentra Callosa) también han de aprobar programas de gestión de residuos "de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos". Por tanto, los planes municipales exigen la previa existencia de planes autonómicos y estatales.

Es decir, que la aprobación de la ordenanza es una exigencia inmediata conforme a la Ley 7/22 pero no lo es la aprobación de programa que viene planteado como segundo objetivo y no como objetivo previo tal como pretende hacer valer el alegante.

Es el Estado y las Comunidades Autónomas, en este caso la Valenciana las que tienen que establecer las disposiciones de carácter general vinculantes y necesarias para la ordenación material y territorial de las actividades de gestión de residuos en nuestro territorio tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y posibilitar el cumplimiento de los objetivos que se prevean en esos planeamientos superiores y en la propia Ley 7/2022.

III.- *En cuanto a que la tasa se desvincula totalmente de la actuación concreta e individualizada y que se cobra el servicio se preste o no con independencia de su coste, tal afirmación no es cierta.*

El artículo 2 de la Ordenanza determina en su apartado 1 que constituye el hecho imponible "la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales procedentes de viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio".

Además, en el apartado 3 de este mismo artículo se dice que: "El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios u ocupantes de viviendas, fincas o establecimientos cuando se preste efectivamente por el municipio de acuerdo al programa de gestión de residuos establecido"

Por su parte en el artículo 5 se dice que "Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del servicio municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria, cuando esté

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 66

establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales".

Es decir, se trata de una tasa que precisamente se devenga en tanto en cuanto se presta el servicio que es general y de recepción obligatoria.

Tampoco resulta cierto que la tasa se halla desvinculada del coste de servicio pues precisamente los informes técnico económicos obrantes en el expediente acreditan y prueban la correspondencia entre los costes del servicio y los ingresos derivados de la aplicación de las tarifas, así como el pleno respeto al principio de equivalencia, al no superar los ingresos los costos.

En cuanto a la infracción del principio de quien contamina paga se dará respuesta en la consideración siguiente.

***IV.-** Respecto al carácter finalista de la tasa y principio de equivalencia, no se alcanza a comprender donde está la vulneración que se indica de que con la tasa se consiguen unos fines distintos para los que legalmente está prevista su exacción, limitándose el alegante a reproducir una serie de sentencias del Tribunal Supremo que en ningún caso resultan de aplicación y a considerar que estamos ante una tasa puramente económica que nada tiene que ver con la prestación del servicio, afirmación vacua y no probada en modo alguno.*

Por el contrario, consta en el informe de la Tesorera Accidental de 17.09.2025 tanto la justificación del coste del servicio como de los ingresos previsibles.

Así, se explicita que se ha tenido en consideración el coste real de los servicios que se obtiene de los gastos previsibles del servicio, efectuando una distinción entre costes directos y costes indirectos.

Se indica expresamente en el informe que "Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o reparto alguno entre otras actividades o servicios."

Se añade en ese mismo informe que para la obtención de dichos datos se ha tenido en cuenta el "informe emitido al efecto por el Ingeniero municipal del Área Técnica del Ayuntamiento, D. Juan Navarro Muñoz" , indicándose a continuación la totalidad de esos costes directos del servicio, con lo que no puede admitirse la afirmación de que no existe un desglose.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 66

En cuanto a los costes indirectos vienen definidos en el informe como "aquellos que no se pueden identificar plenamente con el servicio y han de ser asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios. Se corresponden con la imputación de los gastos corrientes de los servicios generales de administración general y financiera. Se trata de los grupos de programa 920-Administración General (aplicado parcialmente), 931-Política Económica y Fiscal y 934-Gestión de tesorería, cuyas previsiones iniciales en 2025, ascienden a 801.104,01 euros."

Existe por tanto una definición de cuáles son los costes indirectos a aplicar, así como una explicación del método seguido para hallar el coeficiente de imputación de estos costes al servicio relativo a los RSU

Por otra parte, en el informe de intervención nº 39/2025, de 17.09.2025 se explica cómo se ha procedido a la zonificación del término municipal en función de los valores catastrales de los inmuebles definiéndose dos ámbitos territoriales homogéneos, el diseminado y el casco urbano, con referencia al nº de parcelas, empadronados, valor metro y valor catastral de cada una de esas dos zonas de vivienda.

A partir de esos datos y del valor del metro y a efectos de adoptar la cuota teniendo en cuenta la capacidad económica y la mayor generación de residuos se determina la cuota estableciendo una ponderación por vivienda y otra por generación, siendo la primera determinante del 80% de la cuota y la segunda la determinante del restante 20%.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de enero de 2013, recurso de casación 940/2010, en relación con el principio de capacidad económica, del artículo 31.1 de la CE, y del de equivalencia referido a las tasas, ha declarado que "De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada", añadiendo que "A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando".

Por ello, estando debidamente justificados los costes directos e indirectos y los ingresos previsibles por aplicación de las tarifas y la equivalencia entre ambos, no puede concluirse que la tasa aprobada se aparta de la prestación del servicio y que se trata de una tasa económica de finalidad recaudatoria.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 66

En cuanto a la afirmación de que en locales cerrados y sin uso se aplica una tarifa básica y no así en las viviendas, tampoco ha de estimarse como vulneración de norma alguna y causa de nulidad. Lo que se hace con esta aclaración es indicar que a todos los inmuebles se les aplica la tasa y dado que la tasa por uso distinto de vivienda (comercial, terciario o industrial) es superior a la de las viviendas precisamente por ese uso, si no se da el mismo, su tasa es la misma que la correspondiente a un inmueble de uso vivienda.

Y ello porque el pago o no de la tasa no viene dado por un uso u otro sino por la finalidad de la propia tasa en relación con la definición de su hecho imponible y devengo porque no se puede olvidar que la tasa se devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que, si se producen basuras, estas sean recogidas. De ahí que los locales cerrados pueden potencialmente usar el servicio solo que no será aplicable el "tipo agravado" del uso distinto a vivienda sino el de la vivienda.

En definitiva, la tasa de recogida de basura es de recepción obligatoria, y en el caso de viviendas deshabitadas y locales desocupados procederá igualmente el alta de oficio aun cuando no estén habitadas, pero se consideren habitables a todos los efectos, entendiendo que eso se produce cuando la vivienda cuente con servicios tales como agua, luz, etc.... Se hubiera quebrado el principio de igualdad si los locales cerrados hubieran sido exonerados del pago de la tasa, lo que no es el caso.

No resulta de aplicación para el argumento del compareciente el artículo 26.3 TRLHL invocado porque precisamente lo que viene a reafirmar es que el hecho es la prestación del servicio y si ese servicio no se presta (por el Ayuntamiento) es cuando se podrá proceder a la devolución del importe correspondiente. Es decir, lo que permite la devolución es la falta de prestación del servicio, pero en ningún caso el no uso del mismo.

Acreditado el respeto al principio de equivalencia y de igualdad queda por examinar la alegación relativa a la infracción del principio quien contamina paga o del pago por generación

El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa RSU "permita implantar sistemas de pago por generación". Por su parte, el apartado V del Preámbulo de la ley hace referencia a que estas tasas "deberían tender hacia el pago por generación".

Cierto es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota,

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 66

otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos, pero no se trata de algo exigible desde este momento

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación.

Esta conclusión ha quedado plasmada en el apartado 2 del documento "CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA TASA LOCAL DEL RSU", documento consensuado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y Dirección General de Tributos), del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la finalidad de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa o, su alternativa, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento con carácter obligatorio antes del 10 de abril de 2025 se dispone por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, documento conjunto que constituye una guía para la regulación, gestión y aplicación de la tasa o PPPNT de RSU.

Sentado lo anterior, son parámetros que pueden considerarse de carácter objetivo para el cálculo de la tasa: La tipología o uso catastral del inmueble, el número de residentes en el inmueble, el valor catastral, la superficie del inmueble o su ubicación, para el caso de los residuos domésticos, y el tipo de actividad, superficie o ubicación del inmueble, entre otros, para el caso de los residuos de actividades económicas.

Estos parámetros no son exigibles como números clausus en su totalidad, sino que los Ayuntamientos pueden utilizar unos u otros.

La Ordenanza inicialmente aprobada adopta la categorización del uso del inmueble (actividad económica) así como criterios referidos a la ubicación del inmueble (vivienda), como criterios genéricos para determinación de la cuota en cuanto reveladores de la capacidad económica.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 66

Estos criterios permiten cuantificar, siquiera sea de forma indirecta, el volumen de residuos, atendiendo a la categoría de actividades; sintonizan con el principio de que quien contamina paga y, en definitiva, si sirven, a efectos de la distribución de la carga tributaria, a los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad.

La remisión a las distintas actividades como criterio para la aplicación de las distintas tarifas no resulta incoherente y permite conocer al contribuyente las cuantías que se aplican según actividades. Además, resulta razonable fijar la tarifa en función de las actividades de los locales, ya que la producción de residuos es diferente precisamente según el modelo de actividad con el que nos encontremos. En definitiva, desde esta perspectiva, la metodología incluida en la tasa -por remisión a la clasificación de las distintas actividades - no resulta ajena al principio de quien contamina paga, sin que tampoco quepa afirmar que se infringen los principios de capacidad económica y de proporcionalidad por la circunstancia de que la tasa se determine en función de la actividad que se desarrolla en los locales. Precisamente la característica de cada actividad es un indicador de la capacidad económica y proporcionalidad.

También respeta dichos principios la diferenciación entre viviendas de núcleo urbano o diseminadas. No parece ilógico que una vivienda diseminada genera un mayor coste atendido el desplazamiento fuera del núcleo urbano para la recogida de residuos, teniendo además un mayor valor catastral, según se concluye en el informe técnico económico, sin que existan indicios que permitan refrendar una conclusión diferente. La ubicación de las viviendas en el municipio (dentro del núcleo o fuera de él) refleja también el respeto al principio de capacidad económica y proporcionalidad desde otra perspectiva que en este caso sería esa ubicación y el incremento de las dificultades en cuanto a acceso y mayor coste de recogida por mayor coste en gasoil, tiempo de recogida, etc.

En definitiva, aun cuando la delimitación por actividades o por ubicación, permite una evaluación indirecta del volumen de residuos, pero no su determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente, dicha circunstancia no determina la invalidez de la Ordenanza por cuanto no constituye una exigencia desde la perspectiva del principio de equivalencia ni a tenor de la legislación vigente, tampoco desde la entrada en vigor la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues esa previa evaluación de los residuos generados, de modo que se lleve a cabo una "determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente" tampoco parece ser exigible de entrada y si bien puede intuirse un marco jurídico tendente a la necesidad de una motivación reforzada de la tasa en la memoria financiera, a la luz del principio de quien contamina paga y de las exigencias del artículo 11 de la ley estatal, así como a la necesidad de avanzar

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 66

hacia modelos de alta eficiencia (puerta a puerta y "contenedores inteligentes"), definidos como prioritarios por la misma norma, que permitan la identificación de los generadores, tal exigibilidad no lo es desde ya.

***V.-** En cuanto a la nulidad de la ordenanza por infracción del artículo 16 TRLHL debe desestimarse sin más pues en ningún caso el precepto invocado exige para cuantificar la cuota tributaria conocer el número de empadronados en cada inmueble o le número de residuos generados por persona, año y barrio.*

Lo que se exige en la aprobación de la tasa es justificar cuales son los parámetros utilizados y criterios seguidos para determinar las distintas cuotas tributarias, o, como dice el precepto "los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias".

De los informes técnicos económicos resulta suficiente motivación de los criterios y parámetros adoptados para calcular las distintas cuotas, sin que sea exigible ese detalle personalizado en cuanto al residuo generado por persona, año o barrio, conforme a los argumentos ya expuestos en la consideración anterior y cuya reproducción se obvia para no caer en reiteraciones innecesarias.

No existe en definitiva una norma que contenga una regulación taxativa de cuáles son los elementos necesarios para la determinación de las cuotas.

OCTAVO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. JOSÉ RUBÉN GRAU CANALES.

1.- Vulneración del principio "quien contamina paga".

2.- Falta de sistema de "pago por generación"

3.- Las tarifas son arbitrarias y desproporcionadas.

4.- Inadecuación del informe económico-financiero

5.- Nulidad de la tarifa por convertir la tasa en impuesto encubierto.

6.- Ilegalidad del artículo 8.7. Cobro a locales cerrados sin servicio efectivo.

7.- Vulneración de seguridad jurídica y tipicidad por indefinición del hecho imponible

8.- Discriminación injustificada entre casco urbano y diseminado

9.- Vulneración del artículo 16 TRLHL. Faltan elementos esenciales del tributo.

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 66

10.- La ordenanza no incluye bonificaciones ni incentivos ambientales obligatorios.

11.- Falta de proporcionalidad y capacidad económica

12.- Doble imposición material para actividades económicas

***I.-** En cuanto a la vulneración del principio quien contamina paga y falta de sistema de pago por generación. Alegaciones primera y segunda.*

El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa RSU "permita implantar sistemas de pago por generación". Por su parte, el apartado V del Preámbulo de la ley hace referencia a que estas tasas "deberían tender hacia el pago por generación".

Cierto es que las entidades locales deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos, pero no se trata de algo exigible desde este momento

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación.

Esta conclusión ha quedado plasmada en el apartado 2 del documento "CUESTIONES RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA TASA LOCAL DEL RSU", documento consensuado por un Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y Dirección General de Tributos), del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la finalidad de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa o, su alternativa, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo establecimiento con carácter obligatorio antes del 10 de abril de 2025 se dispone por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, documento conjunto que constituye una guía para la regulación, gestión y aplicación de la tasa o PPPNT de RSU.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 66

II.- *En cuanto a que las tarifas son arbitrarias y desproporcionadas, se limita a reproducir las tarifas de la ordenanza sin motivar ni justificar cuales considera arbitrarias y desproporcionadas y respecto a cuáles se considera esa desproporción.*

Que no se hayan tenido en cuenta los parámetros o criterios que se indican en la alegación no significa que no existan otros parámetros que se hayan tenido en cuenta y justificado en los informes técnico-económicos obrantes en el expediente y que son perfectamente válidos como criterio para alcanzar unas tarifas.

Son parámetros que pueden considerarse de carácter objetivo para el cálculo de la tasa: La tipología o uso catastral del inmueble, el número de residentes en el inmueble, el valor catastral, la superficie del inmueble o su ubicación, para el caso de los residuos domésticos, y el tipo de actividad, superficie o ubicación del inmueble, entre otros, para el caso de los residuos de actividades económicas.

Estos parámetros no son exigibles como números clausus en su totalidad, sino que los Ayuntamientos pueden utilizar unos u otros.

La Ordenanza inicialmente aprobada adopta la categorización del uso del inmueble (actividad económica) así como criterios referidos a la ubicación del inmueble (vivienda), como criterios genéricos para determinación de la cuota en cuanto reveladores de la capacidad económica.

Estos criterios permiten cuantificar, siquiera sea de forma indirecta, el volumen de residuos, atendiendo a la categoría de actividades; sintonizan con el principio de que quien contamina paga y, en definitiva, si sirven, a efectos de la distribución de la carga tributaria, a los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad.

La remisión a las distintas actividades como criterio para la aplicación de las distintas tarifas no resulta incoherente y permite conocer al contribuyente las cuantías que se aplican según actividades. Además, resulta razonable fijar la tarifa en función de las actividades de los locales, ya que la producción de residuos es diferente precisamente según el modelo de actividad con el que nos encontremos. En definitiva, desde esta perspectiva, la metodología incluida en la tasa -por remisión a la clasificación de las distintas actividades - no resulta ajena al principio de quien contamina paga, sin que tampoco quepa afirmar que se infringen los principios de capacidad económica y de proporcionalidad por la circunstancia de que la tasa se determine en función de la actividad que se desarrolla en los locales. Precisamente

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 66

la característica de cada actividad es un indicador de la capacidad económica y proporcionalidad.

También respeta dichos principios la diferenciación entre viviendas de núcleo urbano o zonas diseminadas. No parece ilógico que una vivienda diseminada genera un mayor coste atendido el desplazamiento fuera del núcleo urbano para la recogida de residuos, teniendo además un mayor valor catastral, según se concluye en el informe técnico económico, sin que existan indicios que permitan refrendar una conclusión diferente. La ubicación de las viviendas en el municipio (dentro del núcleo o fuera de él) refleja también el respeto al principio de capacidad económica y proporcionalidad desde otra perspectiva que en este caso sería esa ubicación y el incremento de las dificultades en cuanto a acceso y mayor coste de recogida por mayor coste en gasoil, tiempo de recogida, etc.

En definitiva, aun cuando la delimitación por actividades o por ubicación, permite una evaluación indirecta del volumen de residuos, pero no su determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente, dicha circunstancia no determina la invalidez de la Ordenanza por cuanto no constituye una exigencia desde la perspectiva del principio de equivalencia ni a tenor de la legislación vigente, tampoco desde la entrada en vigor la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pues esa previa evaluación de los residuos generados, de modo que se lleve a cabo una "determinación previa y exacta para cada actividad o contribuyente" tampoco parece ser exigible de entrada y si bien puede intuirse un marco jurídico tendente a la necesidad de una motivación reforzada de la tasa en la memoria financiera, a la luz del principio de quien contamina paga y de las exigencias del artículo 11 de la ley estatal, así como a la necesidad de avanzar hacia modelos de alta eficiencia (puerta a puerta y "contenedores inteligentes"), definidos como prioritarios por la misma norma, que permitan la identificación de los generadores, tal exigibilidad no lo es desde ya.

***III.-** Contrariamente a lo que se indica en la alegación quinta y sexta los informes económico-financieros obrantes en el expediente están debidamente motivados y resultan suficientes para ver que la tasa aprobada respeta la legalidad vigente, sin que pueda concluirse que se ha convertido la tasa en un impuesto encubierto.*

Consta en el informe de la Tesorera Accidental de 17.09.2025 tanto la justificación del coste del servicio como de los ingresos previsibles.

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 66

Así, se explicita que se ha tenido en consideración el coste real de los servicios que se obtiene de los gastos previsibles del servicio, efectuando una distinción entre costes directos y costes indirectos.

Se indica expresamente en el informe que "Los costes directos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o reparto alguno entre otras actividades o servicios."

Se añade en ese mismo informe que para la obtención de dichos datos se ha tenido en cuenta el "informe emitido al efecto por el Ingeniero municipal del Área Técnica del Ayuntamiento, D. Juan Navarro Muñoz" , indicándose a continuación la totalidad de esos costes directos del servicio, con lo que no puede admitirse la afirmación de que no existe un desglose.

En cuanto a los costes indirectos vienen definidos en el informe como "aquellos que no se pueden identificar plenamente con el servicio y han de ser asignados de forma global mediante un prorrateo entre otras actividades y servicios. Se corresponden con la imputación de los gastos corrientes de los servicios generales de administración general y financiera. Se trata de los grupos de programa 920-Administración General (aplicado parcialmente), 931-Política Económica y Fiscal y 934-Gestión de tesorería, cuyas previsiones iniciales en 2025, ascienden a 801.104,01 euros."

Existe por tanto una definición de cuáles son los costes indirectos a aplicar, así como una explicación del método seguido para hallar el coeficiente de imputación de estos costes al servicio relativo a los RSU

Por otra parte, en el informe de intervención nº 39/2025, de 17.09.2025 se explica cómo se ha procedido a la zonificación del término municipal en función de los valores catastrales de los inmuebles definiéndose dos ámbitos territoriales homogéneos, el diseminado y el casco urbano, con referencia al nº de parcelas, empadronados, valor metro y valor catastral de cada una de esas dos zonas de vivienda.

A partir de esos datos y del valor del metro y a efectos de adoptar la cuota teniendo en cuenta la capacidad económica y la mayor generación de residuos se determina la cuota estableciendo una ponderación por vivienda y otra por generación, siendo la primera determinante del 80% de la cuota y la segunda la determinante del restante 20%.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 66

La sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de enero de 2013, recurso de casación 940/2010, en relación con el principio de capacidad económica, del artículo 31.1 de la CE, y del de equivalencia referido a las tasas, ha declarado que "De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada", añadiendo que "A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando".

Por ello, estando debidamente justificados los costes directos e indirectos y los ingresos previsibles por aplicación de las tarifas y la equivalencia entre ambos, no puede concluirse que la tasa aprobada se aparta de la prestación del servicio y que se trata de una tasa económica de finalidad recaudatoria, pues se justifica el pleno respeto al principio de equivalencia, al no superar los ingresos los costos.

***IV.-** También tendrá que ser desestimada la alegación relativa que el cobro a locales cerrados sin servicio efectivo sea ilegal.*

El artículo 2 de la Ordenanza determina en su apartado 1 que constituye el hecho imponible "la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales procedentes de viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio".

Además, en el apartado 3 de este mismo artículo se dice que: "El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios u ocupantes de viviendas, fincas o establecimientos cuando se preste efectivamente por el municipio de acuerdo al programa de gestión de residuos establecido"

Por su parte en el artículo 5 se dice que "Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del servicio municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales".

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 66

Es decir, se trata de una tasa que precisamente se devenga en tanto en cuanto se presta el servicio que es general y de recepción obligatoria por lo que la aplicación a los locales cerrados de la tarifa básica de viviendas no es ilegal sino acertado dado que en caso contrario se quebraría el principio de igualdad

Lo que garantiza la tasa en la redacción aprobada es que sea de aplicación a todos los inmuebles y dado que la tasa por uso distinto de vivienda (comercial, terciario o industrial) es superior a la de las viviendas precisamente por ese uso, si no se da el mismo, su tasa es la misma que la correspondiente a un inmueble de uso vivienda.

Y ello no puede ser de otro modo porque el pago o no de la tasa no viene dado por un uso u otro sino por la finalidad de la propia tasa en relación con la definición de su hecho imponible y devengo porque no se puede olvidar que la tasa se devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que, si se producen basuras, estas sean recogidas. De ahí que los locales cerrados pueden potencialmente usar el servicio solo que no será aplicable el "tipo agravado" del uso distinto a vivienda sino el de la vivienda.

En definitiva, la tasa de recogida de basura es de recepción obligatoria, y en el caso de viviendas deshabitadas y locales desocupados procederá igualmente el alta de oficio aun cuando no estén habitadas, pero se consideren habitables a todos los efectos. Se hubiera quebrado el principio de igualdad si los locales cerrados hubieran sido exonerados del pago de la tasa, lo que no es el caso.

***V.-** En cuanto a la afirmación de que el hecho imponible no está definido no merece mayor comentario. El hecho imponible viene perfectamente delimitado en el artículo 2 de la Ordenanza que determina en su apartado 1 que constituye el hecho imponible "la prestación del servicio público de recogida, transferencia y tratamiento de residuos municipales procedentes de viviendas y locales situados en las zonas en que se preste de forma efectiva y en beneficio, no solo de los directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio".*

Además, en el apartado 3 de este mismo artículo se dice que: "El servicio, por ser general y de recepción obligatoria, se entenderá utilizado por los propietarios u ocupantes de viviendas, fincas o establecimientos cuando se preste efectivamente por el municipio de acuerdo al programa de gestión de residuos establecido"

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 66

Siendo el hecho imponible la prestación efectiva del servicio de recogida, transferencia y tratamiento de residuos, no requiere mayor definición ni inclusión de otros elementos como propone el alegante.

VI.- *Tampoco puede aceptarse esa supuesta discriminación entre casco urbano y diseminado pues la motivación para esa diferenciación viene establecida en el informe de intervención de 17.09.2025 obrante al expediente administrativo. Lo que el recurrente llama discriminación es el resultado de aplicar criterios determinantes de la capacidad económica de los contribuyentes.*

VII.- *En cuanto a la nulidad de la ordenanza por infracción del artículo 16 TRLHL debe desestimarse sin más pues en ningún caso el precepto invocado exige para cuantificar la cuota tributaria conocer el número de empadronados en cada inmueble o le número de residuos generados por persona, año y barrio.*

Lo que se exige en la aprobación de la tasa es justificar cuales son los parámetros utilizados y criterios seguidos para determinar las distintas cuotas tributarias, o, como dice el precepto "los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias".

De los informes técnicos económicos resulta suficiente motivación de los criterios y parámetros adoptados para calcular las distintas cuotas, sin que sea exigible ese detalle personalizado en cuanto al residuo generado por persona, año o barrio, conforme a los argumentos ya expuestos en la consideración anterior y cuya reproducción se obvia para no caer en reiteraciones innecesarias.

No existe en definitiva una norma que contenga una regulación taxativa de cuáles son los elementos necesarios para la determinación de las cuotas.

VIII.- *En cuanto a la alegación relativa a que no se incluyen bonificaciones ni incentivos ambientales obligatorios, tal afirmación tampoco es cierta.*

La Ley 7/2022 prevé que las Tasas/PPPNT que establezcan las entidades locales ***podrán tener en cuenta reducciones en la cuota*** *por distintas circunstancias, entre las que cita las siguientes:*

- *Práctica de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica separable.*
- *Participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, como los puntos limpios o puntos de entrega alternativos.*
- *Personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.*

Cód. Validación: 5D4RENGAP9S4TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 66

Asimismo, también resulta de aplicación lo dispuesto con carácter general en el artículo 24.4 del TRLRHL, que dispone que "para la determinación de la cuantía de las tasas ***podrán tenerse en cuenta*** *criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas", lo que habilita, por ejemplo, para el reconocimiento de beneficios fiscales en favor de familias numerosas o monoparentales.*

El establecimiento de reducciones en esta Tasa/ PPPNT debe ser para supuestos concretos, objetivos, motivados y limitados, para no poner en riesgo el principio de que la tasa debe ser "no deficitaria". Cuanto mayor sea el importe global de los beneficios fiscales más se alejará la tasa del cumplimiento del objetivo de cobertura del coste del servicio. Asimismo, hay que tener en cuenta que el objetivo de esta tasa es fomentar la reducción de residuos, por lo que, si se concede a determinados colectivos una reducción o bonificación elevada, podría fomentarse conductas contrarias al cumplimiento de dicho objetivo, ya que, si no pagan la tasa o lo hacen en cuantía mínima, no procurarán disminuir la cantidad de residuos que generen.

Estas razones –el carácter potestativo en el reconocimiento de reducciones o bonificaciones y el riesgo a infringir el principio de que la tasa no ha de ser deficitaria- han llevado a que en la Ordenanza aprobada no se contemplen ni reducciones ni bonificaciones en la cuota salvo la disposición genérica prevista en el artículo 6 de que "gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de ley", lo que supone el respeto al principio de reserva de ley y garantiza la seguridad jurídica.

IX.- *Respecto a la falta de proporcionalidad y capacidad económica, se ha dado respuesta en las consideraciones anteriores, al explicar los criterios seguidos para fijar las cuotas y las razones por las que las viviendas no ocupadas o locales sin uso económico también han de contribuir en igual medida al pago de la tasa, razones que se dan por reproducidas por economía procesal.*

X.- *Respecto a la alegación de existencia de doble imposición material para actividades económicas únicamente decir que no se produce ninguna duplicidad porque mezcla impuestos municipales y tasas cuyos hechos imponibles son distintos y corresponden a hechos impositivos y prestaciones o servicios distintos.*

XI.- *En cuanto a la falta de criterios de revisión del coste real indicar que de acuerdo con el artículo 25 TRLHL "Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización*

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 66

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo."

Por tanto, resulta inviable fijar una tarifa en las tasas sin el respaldo de un informe técnico-económico que se adjunte al expediente correspondiente. Este requerimiento implica, de manera ineludible, la necesidad de modificar la ordenanza fiscal siguiendo el procedimiento detallado en el art. 17 TRLRHL.

En consecuencia, siendo necesario un informe técnico-económico que justifique el correcto cálculo y determinación de ese coste real del servicio y la tarifa que se pretende imponer, no es exigible la fijación de criterio de revisión alguno, debiendo procederse a la modificación de la tasa.

Por todo cuanto antecede se realiza la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

***PRIMERO**.- Admitir las reclamaciones y sugerencias por haber sido presentadas en tiempo y forma.*

***SEGUNDO.-** Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en el cuerpo del presente informe.*

***TERCERO.-** Aprobar definitivamente la "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS" del Ayuntamiento de Callosa de Segura.*

***CUARTO.-** El acuerdo de aprobación definitiva y el texto de la ordenanza deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia e impugnación jurisdiccional.*

***QUINTO.-** Comunicar el acuerdo y el texto de la ordenanza municipal a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-.*

Cód. Validación: 5D4RENGAP964TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 66

SEXTO.- *Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que procedan.*

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente."

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, se propone incluir en el orden del día de la próxima Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios el expediente de referencia al objeto de que, previo estudio y debate, se emita el correspondiente dictamen, en los términos que a continuación se expresan:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Admitir las reclamaciones y sugerencias por haber sido presentadas en tiempo y forma.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en el cuerpo del presente informe.

TERCERO.- Aprobar definitivamente la "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS" del Ayuntamiento de Callosa de Segura.

CUARTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el texto de la ordenanza deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, para su vigencia e impugnación jurisdiccional.

QUINTO.- Comunicar el acuerdo y el texto de la ordenanza municipal a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que procedan.

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 66

La Alcaldesa-Presidenta abre el debate y se producen las siguientes intervenciones, las cuales pueden reproducirse mediante los archivos de audio que figuran en este documento.

Intervienen: Mª Desamparados Serrano LLoret, José Antonio Illán Cutillas, Inmaculada Cascales Salinas, Francisco J. Maciá Serna y Ana Belén Berná Berná

Audio: 02.mp3

Enlace: http://videople.es/8517

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª María de los Desamparados Serrano LLoret, somete a votación la propuesta, que es aprobada por mayoría absoluta, con nueve votos a favor (5 PSOE, 3 UCIN y 1 IU-UP) y siete votos en contra (7 PP) de los dieciséis concejales presentes en el momento de la votación, de los diecisiete Concejales que de hecho y derecho componen la Corporación.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Cód. Validación: 5D4RENGAP954TQCS5F2A6P6ES
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 66